**EL ROL DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LEGISLACION
PARAGUAYA Y EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA. SU EVOLUCION HISTORICA EN UN ESTADO
DE DERECHO.**

JULIO CESAR GARCETE PEREZ

TUTOR: ABOG. AGUSTINA BARRIOS ORTELLADO

**Universa presentada a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Tecnológica Intercontinental como requisito para
obtener el Título de Abogado**

CAACUPÉ – Paraguay

Abril – 2.013

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES**

**CARRERA DE DERECHO
SEDE XIV CAACUPE**

AUTORIDADES ACADEMICAS

**PROF. DR. HUGO FERREIRA GONZALEZ
RECTOR**

**PROF. DR. AMADO VERON DUARTE
DECANO**

**PROF. ABOG. RAQUEL RAMOS AQUINO
DIRECTORA DE CARRERA**

**LIC. LILIANA FLORENTIN LEDESMA AGUILERA
DIRECTORA DE SEDE**

PROCOLO DE APROBACION

**“EL ROL DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LEGISLACION
PARAGUAYA Y EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SU EVOLUCION HISTORICA EN UN ESTADO DE DERECHO”**

JULIO CESAR GARCETE PEREZ

TUTORA: PROF. ABOG. AGUSTINA BARRIOS ORTELLADO

DIRECTORA DE CARRERA: PROF. ABOG. RAQUEL RAMOS A.

DECANO: PROF. ABOG. AMADO VERON DUARTE

RESULTADO DE LA EVALUACION

DERECHO DE AUTOR

Quien suscribe, Julio Cesar Garcete Pérez, con Documento de Identidad N° 3.657.867 autor del trabajo de investigación **“El rol de la Policía Nacional en la Legislación Paraguaya y en el contexto de la Seguridad Pública. Su evolución histórica en un Estado de Derecho.”**, declara que voluntariamente cede a título gratuito y en forma pura y simple, ilimitada e irrevocable a favor de la Universidad Tecnológica Intercontinental el derecho de autor de contenido patrimonial que como autor le corresponde sobre el trabajo de referencia. Conforme a lo anteriormente expresado, esta cesión otorga a la UTIC la facultad de comunicar la obra, divulgarla, publicarla y reproducirla en soportes analógicos o digitales en la oportunidad que ella así lo estime conveniente. La UTIC deberá indicar que la autoría o creación del trabajo corresponde a mi persona y hará referencia al tutor y a las personas que hayan colaborado en la realización del presente trabajo de investigación.

En la ciudad de Caacupé, a los 27 días del mes de diciembre del 2.012.

JULIO CESAR GARCETE PEREZ

CONSTANCIA DE APROBACION DEL TUTOR

Quien suscribe, Prof. Abog. Agustina Barrios Ortellado, con Documento de Identidad N° 1.040.726, Tutora del trabajo de investigación titulado **“El rol de la Policía Nacional en la Legislación Paraguaya y en el contexto de la Seguridad Pública. Su evolución histórica en un Estado de Derecho”**, elaborado por el alumno JULIO CESAR GARCETE PEREZ para obtener el Título de Abogado hace constar que dicho trabajo reúne los requisitos exigidos por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica Intercontinental y puede ser sometido a evaluación y presentarse ante los docentes que fueren designados para integrar la Mesa Examinadora.

En la ciudad de Caacupé a los 03 días del mes de abril del 2.013.

PROF. ABOG. AGUSTINA BARRIOS ORTELLADO

DEDICATORIA

En memoria de mi padre Ulises Francisco Garcete (+), quien en vida siempre procuró por mi formación y a mi madre Lucia Pérez Vda. de Garcete, por su incansable acompañamiento y buenos consejos durante el transcurso de mi carrera.

A mi gran amor, por su apoyo y su amor incondicional en cada momento de mi vida.

AGRADECIMIENTO

A DIOS, por el amor y bendición de todos los días de mi vida, por el regalo de vida y luz de mi alma.

A mis hermanos UlisesFabián, Francisco Adriano, Miguel Anselmo, Chrystina Roxana, Cristian Daniels, Williams Ariel, Víctor Manuel, Kevin Oscar y KristelMonserrath, por el apoyo y aliento para seguir con mis estudios.

A mi tutora, por su disponibilidad para disipar mis dificultades.

**EL ROL DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LEGISLACIÓN
PARAGUAYA Y EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN UN ESTADO DE DERECHO.**

Autor: Julio Cesar GarcetePerez

Orientadora: Prof. Abog. Agustina Barrios Ortellado

RESUMEN

El tema de la inseguridad reinante actualmente en la República del Paraguay, además de la circunstancia que en nuestro país últimamente es muy criticada la Institución Policial ha servido de motivación para seleccionar el tema desarrollado en la presente investigación. Es objetivo principal de esta labor investigativa analizar cómo se halla estructurada legal y administrativamente la Policía Nacional, bajo qué condiciones y con qué nivel de presupuesto público, para el cumplimiento de su rol en el ejercicio de la custodia del orden y la seguridad interna, como garantía consagrada constitucionalmente. El tema "Derecho Policial", en nuestro país oficialmente esta palabra "Policía" surge el 8 de marzo de 1.843, con una imagen más bien represiva, custodio y organizador de orden en las ciudades del país. Después de la dictadura de Gral. Alfredo Stroesner, en el año 1.992, surgió la Policía Nacional, en virtud de la promulgación de la ahora vigente Constitución Nacional (20 de junio de 1992), con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional. Es una institución profesional, cuya organización y funciones están reglamentadas en la Ley N° 222/93 Orgánica de la Policía Nacional. Como conclusión del presente trabajo se ha extraído que formar parte de la institución policial debe ser por motivación intrínseca y trascendental impulsado por vocación y espíritu de servicio y no por motivación extrínseca de obtener dinero en forma ilícita.

Palabras claves: Derecho Policial - Policía Nacional- seguridad

ÍNDICE

Autoridades Académicas.....	ii
Protocolo de aprobación.....	iii
Derecho de Autor.....	iv
Constancia de Aprobación del Tutor.....	v
Dedicatoria.....	vi
Agradecimiento.....	vii
Resumen.....	viii
Índice.....	ix

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA

Introducción.....	1
I.1. Planteamiento del Problema.....	2
I.2. Preguntas de Investigación.....	4
I.3. Formulación del Problema.....	5
I.4. Objetivos.....	6
I.4.1. Generales.....	6
I.4.2. Específicos.....	6
I.5. Justificación.....	7

CAPÍTULO II

II.1. ROL DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LEGISLACION PARAGUAYA Y EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	
II.1.1. Breve Historia.....	8
II.1.2. Concepto General.....	9
II.1.3. La Función Policial.....	11
II.1.3.1. Funcion de Seguridad o de Prevencion.....	12
II.1.3.1.1. Preservar el orden publico legalmente establecido.....	12
II.1.3.1.2. Preservar los derechos. La seguridad de las personas y de las entidades y de sus bienes.....	12
II.1.3.1.3. Ocuparse de la prevención de los delitos.....	13

II.1.3.2.Función Investigativa.....	13
II.1.3.2.1.Ejecutar los mandatos de la autoridad competente.....	14
II.1.3.2.2.Investigar los delitos bajo dirección judicial.....	14
II.1.3.2.3.Cumplimiento de su misión investigativa bajo dirección del Ministerio Publico.....	15
II.1.4.Dirección Funcional.....	15
II.1.4.1.Dificultades.....	16
II.1.5.Policía Nacional auxiliar de la Justicia.....	19
II.1.6.Imposibilidad fundada de realizar un procedimiento.....	21
II.1.7.Aclaraciones conceptuales contenidas en el Art. 175 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Policial.....	22
II.1.7.1.Institución Profesional.....	22
II.1.7.2.No deliberante y obediente.....	23
II.1.7.3.Carácter permanente.....	25
II.1.7.4.Dependencia jerárquica.....	26
II.1.7.5.Jurisdicción.....	29
II.1.7.6.Estructura funcional jerárquica.....	30
II.1.7.6.1.Correlación entre grado y niveles de mando.....	30
II.1.7.6.2.Promociones y ascensos.....	31
II.1.7.6.3.La antigüedad.....	32
II.1.7.6.4.Remesas y ubicación.....	32
II.1.8.La fuerza pública.....	33
II.2. EVOLUCION HISTORICA EN EL ESTADO DE DERECHO	
II.2.1.Breve historia.....	34
II.2.2.Policia en el Estado de Derecho.....	35
II.2.3.Su fundamento en la constitución.....	35
II.2.4.Situacion Jurídica.....	36
II.2.5.Definición del Derecho Policial.....	37
II.2.5.1.Fuentes del Derecho Policial.....	38
II.2.5.2.Caracteres del Derecho Policial.....	39
II.2.5.2.1.Mantenimiento del Orden.....	40
II.2.5.2.2.Carácter Preventivo.....	41

II.2.5.2.3.El Uso de la Coacción.....	42
II.2.5.2.4.Carácter negativo de las normas Policiales.....	42
II.2.5.3.Actos de Ejecución.....	43
II.2.6.Materia de Policía.....	44
II.2.7.Su origen en la Constitución.....	45
II.2.8.Los derechos humanos.....	46

CAPÍTULO III – MARCO METODOLÓGICO.

III.1.Características Metodológicas.....	49
III.1.1.Enfoque de la investigación: cualitativa o fenotipológica.....	49
III.1.2.Tipo y nivel de Investigación.....	49
III.1.3.Diseño de la Investigación.....	49
III.2.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	50
III.3.Descripción del Procedimiento y Análisis de Datos.....	50

CAPÍTULO IV – EL RESULTADO.

Conclusiones y Recomendaciones.....	51
-------------------------------------	----

BIBLIOGRAFÍA.....	54
--------------------------	-----------

ANEXOS.....	54
--------------------	-----------

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Introducción

El tema de investigación, ha sido seleccionado a raíz de la importante labor que la Policía Nacional en virtud de la propia Constitución Nacional tiene a su cargo, la seguridad y el orden social. Esa circunstancia sirvió de inspiración para la selección del tema de investigación titulado: **“El rol de la policía nacional en la legislación paraguaya y en el contexto de la seguridad pública. Su evolución histórica en un Estado de Derecho”**.

Este material se presenta con un excelente soporte metodológico, con el seguimiento procesual del Tutor asignado, además cuenta con apoyo doctrinario calificado (citas), y notas, es decir, la opinión propia del autor desarrollado desde una perspectiva cualitativa de tipo hermenéutico.

El presente reporte investigativo se encuentra estructurado de la siguiente forma: el Capítulo I contempla el planteamiento de problema; el Capítulo II contiene todo el marco Teórico, que comprende los antecedentes de la investigación, las teorías existentes sobre el tema; el Capítulo III diseña el marco metodológico y el Capítulo IV se ocupa de las conclusiones del trabajo realizado.

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tanto la religión, la defensa y organización política son conductas constantes en las sociedades humanas en cualquier grado de evolución. Son de existencia natural y necesaria para satisfacer las necesidades sociales. La religión brinda respuesta a miedos profundos como pueden ser la muerte, las enfermedades y lo desconocido; la defensa, al sistema jurídico y la protección del grupo; y la política, a la división del trabajo y la necesidad de distribuir los bienes y servicios producidos por la sociedad. Es que no puede existir una sociedad sin defensa. Una ley sin fuerza o poder para castigar a quienes la violenten deja automáticamente de ser ley.

El Estado moderno necesita defensa, tanto externa como interna.

La defensa y seguridad interior está a cargo de la Policía Nacional. El término “policía” se lo deriva de la voz griega “polis” y también “politeia”, equivalente al buen orden que se debe observar en la guarda de las ciudades y repúblicas, y en particular sobre la necesidad de cumplirse la ley para un mejor Gobierno.

La seguridad interna tiene como ámbito espacial todo el territorio de la República del Paraguay, sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo.

El sistema de seguridad interna tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas.

La Constitución Nacional de 1.992, se ha ocupado de regular la estructuración de la defensa del Estado Paraguayo.

La policía es el cuerpo profesional perteneciente al Estado, y por consiguiente a la administración pública que tiene bajo su

responsabilidad la prevención, control y custodia de una posible conducta desviada que puede afectar a cualquier integrante de una sociedad, que no esté dispuesto a acatar el sistema jurídico positivo de cumplimiento obligatorio.

Dentro del marco de la Constitución y las leyes, la "Policía" tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos, la seguridad de las personas, de entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos.

En virtud de la ley N° 1.337/98 que se ocupa de la Defensa Nacional y la Seguridad Interna, los miembros de la Policía ejercerán sus funciones de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; conforme al principio de adecuación y proporción de los medios que utilicen en cada ocasión específica, y evitando en lo posible que su accionar afecte la integridad física y psíquica de las personas o cause daño a sus bienes. Por seguridad interna se entiende la situación de hecho en la cual el orden público está resguardado, así como la vida, la libertad y los derechos de las personas y entidades y sus bienes, en un marco de plena vigencia de las instituciones establecidas en la Constitución.

Es deber de toda sociedad democrática evaluar y discutir cómo será organizada esa defensa, bajo qué condiciones y con qué costo social será ejercida esa defensa.

Ante la afirmación precedente, surge como interrogante de esta investigación, el siguiente cuestionamiento ¿Cómo se encuentra legal y administrativamente estructurada la Policía Nacional, bajo qué condiciones y con qué nivel de presupuesto público cumple su rol en el ejercicio de la defensa y seguridad social?

I.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- 1- ¿Cómo está organizada jerárquicamente la institución Policial?
- 2- ¿Bajo qué condiciones desempeñan el rol conferido?
- 3- ¿En materia presupuestaria, cual es la realidad de la Policía Nacional, para el cumplimiento de sus roles?
- 4- ¿La legislación vigente, se ocupa suficientemente de las faltas y delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional, dentro del ejercicio de sus funciones?

I.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Dada la invaluable importancia del rol asignado constitucionalmente a la institución policial el de velar por la seguridad interna y por el orden dentro del territorio paraguayo, se considera que es deber de toda sociedad democrática evaluar y discutir cómo será organizada esa defensa, bajo qué condiciones y con qué costo social será ejercida esa defensa.

Ante la afirmación precedente, surge como interrogante de esta investigación, el siguiente cuestionamiento ¿Cómo se encuentra legal y administrativamente estructurada la Policía Nacional, bajo qué condiciones y con qué nivel de presupuesto público cumple su rol en el ejercicio de la defensa y seguridad social?

I.4 OBJETIVOS

I.4.1. GENERALES

Analizar cómo se halla estructurada legal y administrativamente la Policía Nacional, bajo qué condiciones y con qué nivel de presupuesto público, para el cumplimiento de su rol en el ejercicio de la custodia del orden y la seguridad interna, como garantía consagrada constitucionalmente.

I.4.2. ESPECÍFICOS

- 1- Analizar cómo está organizada jerárquicamente la institución Policial.
- 2- Indagar bajo qué condiciones desempeñan el rol conferido.
- 3- Evaluar en materia presupuestaria, cual es la realidad de la Policía Nacional, para el cumplimiento de sus roles.
- 4- Averiguar si la legislación vigente, se ocupa suficientemente de las faltas y delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional, dentro del ejercicio de sus funciones.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Una de las garantías que todo Estado de Derecho debe otorgar a los habitantes que habitan su territorio es la seguridad interna, tanto en lo que respecta a su vida, su libertad y los bienes que integran su patrimonio.

Llevar a cabo un análisis exhaustivo de la organización, funciones y fines de la Policía Nacional para el cumplimiento de su rol como protagonista de esa seguridad interior, tiene una verdadera trascendencia en los tiempos actuales.

El contenido del presente reporte investigativo será de utilidad como fuente de conocimiento, así como base de nuevas investigaciones a realizarse ya sea desde un enfoque cualitativo o cuantitativamente.

Los datos contenidos en esta sencilla obra, beneficiará a la ciudadanía en general, y con mayor énfasis a los estudiantes de la carrera de Derecho de esta prestigiosa casa de estudios.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

II.1. ROL DE LA POLICIA NACIONAL EN LA LEGISLACION PARAGUAYA Y EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

II.1.1. Breve Historia

La policía paraguaya fue creada el 8 de marzo de 1.843, durante el Gobierno del Segundo Consulado integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Pedro Nolasco Fernández fue el primer Jefe de Policía y organizó la estructura interna de la institución que fue denominada Departamento de Policía de la Capital.

El 20 de junio de 1992, tras ser promulgada la nueva Constitución del país, surgió la Policía Nacional entre las instituciones designadas como Fuerza Pública, previstas en su artículo 172. La nueva agrupación policial, que unió las diversas fuerzas anteriormente encargadas del trabajo policial, tuvo en su dirección, por primera vez, un agente policial de carrera, el Comisario General Germán Gabriel Franco Vargas.

Uno de los más grandes es el Comisario General y Subcomandante Juan Erasmo Candía que subió a ese cargo desde muy joven, lastimosamente falleció en año 2.007.

Hasta el año 1992, en Paraguay existían 18 organizaciones policiales. Una de ellas denominada policía de la Capital, abarcaba la ciudad de asunción y las jurisdicciones de varias localidades cercanas a ella. La Jefatura de este era ejercida usualmente por un miembro de las FF.AA, al menos en los últimos años. Las 17 restantes funcionaban a cargo de los Delegado de Gobiernos, designados por el Poder Ejecutivo.

II.1.2. Concepto General

La policía es un organismo civil armado, que tiene a su cargo velar por que se cumpla la Constitución Nacional, las Leyes y los Reglamentos, protegiendo la vida, el medio ambiente y los bienes, posibilitando la vigencia del Estado de Derecho, el normal desenvolvimiento de las instituciones y el desarrollo integral de las personas. Su finalidad esencial es la de brindar la protección pública orientada hacia el fin de seguridad en procura de la armonía, la convivencia practica y el orden social.

Por tanto, su existencia se funda en la protección de los tres bienes jurídicos más importantes de la persona humana, garantizado y defendido por la Legislación Universal: son ellos la vida, la libertad y la seguridad en este orden de importancia.

Comprende la protección contra los ataques al individuo y al grupo social mismo, como también a la estructura política del Estado. Esa protección es la Seguridad. No es una mera seguridad de hecho, es una seguridad normada desenvuelta en el ámbito de un ordenamiento jurídico, una seguridad por medio de un ordenamiento jurídico, una seguridad por medio del Derecho. No debe confundirse con una defensa militar, la cual responde a otro orden de ideas y es ejercida por otros medios.

La “defensa militar” está a cargo de miembros de las FF.AA. Estos se adiestran en el arte de la guerra, para la defensa de la integridad territorial. La Constitución en su Art.173 les faculta a “custodiar la integridad territorial de la República”, expresión traducida en no permitir que porción alguna del sea usurpada, violentada o anexada por otro país, ni que se organicen o conformen grupos o unidades territoriales distintos a los fines de la República.

Los policías, por nuestra parte, en razón de la misión totalmente diferente a cumplir, debemos ser adiestrados para desarrollar un gran

sentimiento humanitario y compasivo, que nos permita proteger a los miembros de la comunidad, evitando violencias y accidentes, ayudar a los débiles, desvalidos, anormales, ancianos, mujeres y niños, guiar a la juventud, preservar al inocente y para que en todo sentido imperen la paz y el orden.

El policía debe tener no solo un absoluto respeto a la ley. Debe también conocerla con precisión. Tener capacidad para explicarla al público, en la conciencia de ser garantes de sus derechos fundamentales, como a la vida, a la libertad, a la seguridad, igualdad y justicia, a una libre y fraterna asociación, al desarrollo integral de la personalidad y otros derechos. Es decir, su misión fundamental consiste en proteger, servir y restaurar el orden público, si fuere perturbado.

Actualmente, se maneja un criterio más bien preventivo que represivo, pero no es menos cierto también, que la Policía esté obligada igualmente a REPRIMIR, cuando los intereses superiores de la nación así lo exijan, para que tenga plena vigencia el cumplimiento de la ley. Pero esta medida extrema de la Policía debe ceñirse estrictamente a la ley se la debe emplear con mucha prudencia, pues no existe un instrumento de medición exacta, de donde termina la cordura y comienza el exceso. A esto se suma, que las actuaciones de los funcionarios públicos son actos absolutamente reglados y no discrecionales.

La seguridad responde a la idea de que en la vida reine un orden cierto y de seguro cumplimiento. Dicho orden puede ser objetivo de varias determinaciones, pues se trata de un fin valorado de amplísimo contenido social y político. Pero en la base de todas esas determinaciones subyace un orden primario, un orden de policía, al que suele concebirse modernamente como “orden público”, aunque en forma bastante ambigua.

Para los propósitos de esta indagación elemental, basta con señalar que en el orden de policía hay una idea de protección, de tutela de la autoridad contra alteraciones violentas del orden social, jurídica y política.

II.1.3. La Función Policial

Todo lo anterior atañe a las funciones de una Policía de Seguridad. Esta seguridad, es de luego, la función primaria de toda organización policial. Deriva de la función de policía del Estado. La misma es única, indivisible y se funda en que constituye la expresión de la soberanía del Estado, la cual como se sabe es indivisible.

Aun cuando la legislación de un país tenga previsto la organización de varios órganos con funciones de policía, ellos conforman la expresión de un solo Estado.

Por ello, más aun en un Estado Unitario, no es aconsejable la inexistencia de varias Fuerzas Policiales, pues es muy difícil establecer una coordinación eficaz y eficiente entre sus dependencias, en razón de las funciones generalmente casi idénticas y, lógicamente, por los celos propios entre los recursos humanos competentes.

Admitiendo la indivisibilidad de la función policial, se destacan, sin embargo, dos aspectos que hacen a la expresión del "imperium", de la soberanía interna del Estado. Son ellos, la seguridad o prevención y la investigación de los hechos punibles, la que en algunas legislaciones se conoce con la denominación de función judicial o sencillamente función de Policía Judicial.

El segundo aspecto se funda en que la seguridad no tiene el 100% de efectividad y que como consecuencia de su vulneración, surge el derecho del Estado a penar a quienes atentan contra ella.

El sistema constitucional establece las bases como el Estado ejercitara dicho derecho y una ley especial, al Código Procesal Penal en nuestro caso, lo hace con mayores detalles y especificidad.

Interpretando finalmente este principio, nuestra Constitución Nacional, en un solo Artículo, el 175, prevé los dos aspectos.

II.1.3.1. Función de seguridad o de prevención

Obviando hacer referencia a los fundamentos doctrinarios, nos remitimos directamente a lo que la Constitución Nacional establece como misión de la policía.

II.1.3.1.1. Preservar el orden público legalmente establecido

La Policía Nacional tiene la misión de preservar el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alterados por la voluntad de los individuos ni en su caso, por la aplicación de normas extranjeras(Diccionario Jurídico Manuel Ossorio).

La facultad preventiva de la Policía está dada por el Art. 175 de la Constitución de la República, con la que la institución está obligada a desarrollar a través de planes de prevención del delito y acciones de educación comunitaria, para impedir la comisión de hechos atentatorios contra la convivencia ciudadana.

II.1.3.1.2. Preservar los derechos. La seguridad de las personas y de las entidades y de sus bienes.

La seguridad es la condición fundamental del desarrollo. Todas las personas, entidades, las instituciones públicas y privadas deben ser protegidas en sus derechos y en su seguridad. Los derechos y garantías de diversos órdenes que les son reconocidos, deben ser de

cumplimiento inexorable, por tanto defendidos y puestos bajo “llave de seguridad” por el Estado.

El órgano a través del cual el Estado ejerce la “Fuerza Pública” o “autoridad”, para el cumplimiento de la misión de preservar la seguridad interna y el orden público legalmente establecido que la asigna la Constitución, es la Policía Nacional.

Al respecto, el Art. 4º de la ley N° 222/93., prescribe: “La Policía Nacional, como órgano de seguridad interna del Estado, podrá hacer uso de la fuerza pública, para el cumplimiento de su cometido”.

II.1.3.1.3. Ocuparse de la prevención de los delitos

La labor preventiva ha sido siempre la más importante función de toda organización de seguridad interna de un país. La misión esencial de una Policía es utilizar todos sus recursos en procura de impedir el quebrantamiento del orden. En lo que ello respecta, diversos son los medios que ella implementa con esa finalidad (patrullas, control de rutas identificación de personas seguridad de los espectáculos públicos, educación ciudadana, etc.).

La Policía Nacional no es entre los órganos del estado. El único encargado de la prevención del delito. Existen otros que igualmente o quizás en mayor grado, son también responsables de planificar y desarrollar mecanismos con tal finalidad, como ser el Poder Judicial. El sistema penitenciario, el sistema educativo escolar básico, la educación vial, la educación cívica, etc.

II.1.3.2. Función Investigativa

La seguridad o la prevención no son absolutas. Ella es vulnerable. Cuando ello ocurre, la misma ley establece los mecanismos para establecerse el orden y “la paz social”. En lo que a la policía compete, la

Constitución Nacional y las leyes precisan su papel. Remitámonos a lo que la Constitución establece al respecto el art. 175.

II.1.3.2.1. Ejecutar los mandatos de la autoridad competente

Dentro del marco de la función investigativa de los hechos punibles, la Policía Nacional es auxiliar permanente y brazo ejecutor de los mandatos del Poder Judicial. Igualmente presta el auxilio de la fuerza pública a otras instituciones que legalmente lo soliciten para el cumplimiento de sus fines, por cuanto la Policía Nacional es el único órgano del Estado que cuenta con dicho atributo.

Estos mandatos pueden consistir en órdenes judiciales para la detención de personas, allanamiento de recintos privados comisos de productos nocivos y peligrosos, vigilancia de personas con fines preventivos y otros.

II.1.3.2.2. Investigar los delitos bajo dirección judicial

La profesión no tiene eficacia en un 100 % de ahí que, si no ha sido implementado Policía Nacional todos los mecanismos tendentes a evitar la perpetración de hechos punibles, se produce la ruptura del orden atreves de comisión y, entonces corresponde su investigación y esclarecimiento por los medios establecidos en la Ley.

El nuevo Código de Procedimientos Penales otorga al Ministerio Publico un papel protagónico en la investigación de los hechos punibles. Esto se funda especialmente en la adopción del sistema “acusatorio” en sustitución del sistema “inquisitivo”.

En este último juez cumplía una multiplicidad de funciones en cuanto que tenía que investigar el delito, luego juzgar y finalmente dictar sentencia.

En el sistema "acusatorio" la función de investigar y de presentar la acusación se le asigna al fiscal. El juez se limita a juzgar y a dictar sentencia.

II.1.3.2.3. Cumplimiento de su misión investigativa bajo dirección del Ministerio Público

En lo que se refiere al papel de la Policía Nacional, es importante destacar que sus efectivos, de estar cumpliendo exclusivamente directivas o disposiciones emanadas de los jueces de primera instalación, en el marco del procedimiento inquisitorio anterior pasan a realizar su trabajo bajo dirección de los agentes fiscales. Estos, también deben ajustar sus actos a las disposiciones legales. Las directivas e instrucciones a ese fin deben ser importadas por ellos, no por funcionarios de rango inferior (secretarios, auxiliares u otros funcionarios).

Un cambio fundamental en la filosofía del sistema, a la que hasta ahora resulta difícil su adaptación, es que rige actualmente el principio, "investigar para detener", en contraposición al principio anteriormente aplicado, "detener para investigar".

La libertad es la norma. La privación de ella es la excepción. Sabemos que la libertad ocupa el primer lugar de la vida, entre los atributos más protegidos de la persona humana. Por ello la privación de ella se lleva a cabo exclusivamente en base a orden judicial. La Ley establece las excepciones en que se lo puede hacer sin la orden judicial pertinente (flagrancia).

II.1.4. Dirección Funcional

Por dirección funcional se entiende, que en tanto se asigne en una función para cada caso específico, los funcionarios de la Policía

Nacional están subordinados a lo dispuesto por el Fiscal General del Estado, Fiscales Generales Adjuntos y Agentes Fiscales.

No tienen subordinación jerárquica, sino exclusivamente operacional. En su última parte el artículo 52 reza: “en tanto se los asigne a la investigación de determinación de ciertos hechos punibles”.

Los funcionarios o reparticiones de la Policía Nacional, que realicen su trabajo investigativo bajo dirección funcional y control del Ministerio Público, deben ser designados, para cada caso, bien determinado, por el Jefe de la dependencia interviniente, a través de una orden de servicio.

La prescripción del artículo 52, es reforzada por el Artículo 58, que transcrito estatuye: “Art. 58. Función. Los agentes y funcionarios de la Policía Nacional, en su función de investigación de hechos punibles, actuarán a través de cuerpos especializados designados al efecto, y a iniciativa del Ministerio Público ejecutará los mandatos de la autoridad competente, sin perjuicio del régimen jerárquico que los organiza”.

II.1.4.1. Dificultades

En la investigación de hechos punibles, se tropieza con numerosos obstáculos de orden material. Ellos entorpecen el ejercicio de la facultad investigativa por parte de los órganos responsables del Estado, abonan el camino a la impunidad y favorecen el crecimiento de las organizaciones delictivas. Ninguno de dichos obstáculos es tan apremiante como la precariedad de medios con que la Policía Nacional encara el cumplimiento de ese papel desde los inicios de su existencia.

Similares precariedades confronta el Ministerio Público, que al igual que la Policía Nacional, precisa de un presupuesto adecuado para el eficiente cumplimiento de sus funciones.

La sociedad paraguaya, muy estricta a la hora de exigir resultado, hasta ahora no ha tomado con la debida seriedad la misión investigativa de hechos punibles asignada tanto al Ministerio Publico como a la Policía Nacional.

Con la precariedad de medios, para una u otra institución, resulta muy difícil de cumplir a cabalidad sus respectivos papeles.

La voluntad demostrada por sus componentes, a través de la plena dedicación a los trabajos, no es suficiente para la obtención de los resultados, más aun cuanto que hoy día es esencial contar con pruebas fundadas, obtenidas por medio de la ciencia y a la técnica.

Y esto no es todo. La investigación de los hechos punibles tiene costo económico. En ocasiones un caso le lleva al investigador semanas, incluso meses. Le exige desplazamiento de un lugar a otro de la República, utilizar vehículo, combustible, obtener información, alimentarse, etc., durante todo ese tiempo.

Exige asimismo el Código Procesal Penal que en las dependencias Policiales se organiza un archivo individualizado (Art. 299 CPP), que igualmente tiene su costo económico.

No es razonablemente admisible que el personal asignado a una investigación, sea del Ministerio Publico, sea de la Policía Nacional, solvente con su peculio personal tales costos. Debe necesariamente la sociedad paraguaya, a través de los órganos pertinentes del Estado, presupuestarlos desde su inicio hasta la última etapa del proceso. Invertir en seguridad, es invertir en desarrollo.

Los funcionarios policiales, entre los actores del sistema penal, por razones obvias, son los que tienen contactos más asiduos con las víctimas de hechos punibles, especialmente los que afecten el patrimonio. Ellos, con frecuencia son proveídos por los damnificados de

recursos económicos y/o materiales para llevar adelante sus investigaciones. Pero tales “ayudas” pueden dar lugar a abusos y reflejan una imagen más que pésima de la noble institución protectora de los bienes jurídicos. El ciudadano, con estar al día con el pago de sus impuestos, tiene todo el derecho a las garantías y protección debidas por el Estado.

Además, al policía le está prohibido recibir dádivas o remuneraciones de cualquier naturaleza, hecho previsto y penado por el Código Penal.

Los obstáculos con que la institución policial tropieza como consecuencia de la carencia de suficientes recursos para satisfacer las necesidades, no son bien comprendidos. A la fecha se tiene ejemplos patentes, denuncias ante autoridades superiores de la institución de presuntas solicitudes de “coimas” por funcionarios policiales, para hacer estos “lo que están obligados a hacer” y pedidos formales de “apercibimiento” a los mismos, al no hacerse presente en juicios orales y testimoniar su participación en la investigación como perito técnico, cuando los lugares a donde deban trasladarse son muy distantes (Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, por ejemplo) y no se cuenta con rubro para ello.

- a. Cumplimiento de directivas e instrucciones del Ministerio Público.
- b. Prescripciones del Código Procesal Penal.

El Artículo 59 del Código Procesal Penal establece que “los funcionarios y agentes de la Policía Nacional asignados a una investigación deberán cumplir las directivas e instrucciones del Ministerio Público y las que durante la tramitación del procedimiento les dirijan los jueces, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están subordinados. La autoridad administrativa no pobra revocar, alterar o retardar una orden emitida por los fiscales o por los jueces”.

El Artículo 60 insiste aún más en el tema, al precisar que “los funcionarios y agentes de la Policía Nacional respetaran las formalidades previstas para la investigación y adecuaran sus actuaciones a las directivas e instrucciones de carácter general o particular que emita el Ministerio Público”.

II.1.5. Policía Nacional Auxiliar de la justicia

Existen discusiones en el ámbito policial en cuanto a la constitucionalidad o no del carácter de “auxiliar” del Ministerio Público que el Código Procesal Penal atribuye a la Policía Nacional.

El tema no amerita disquisiciones bizantinas, pues sustituir el termino auxiliar del Ministerio Publico por el de “auxiliar de justicia”, en nada cambiaría el papel que le corresponde desempeñar en la investigación de los hechos punibles a la Policía Nacional, que tiene una clara dualidad de funciones, la de seguridad y la de investigación o judicial.

La Policía Nacional y el Ministerio Público son auxiliares de la justicia. Ambas instituciones tienen papeles protagónicos taxativamente establecidos en el Código Procesal Penal. Deben necesariamente interactuar en estrecha cooperación y en la Ley, ni asumir papeles que no les sean propios, para que se garantice el éxito de la misión que se les asigna.

Amerita si prestar debida atención, inclusive impulsar, que las instituciones involucradas asuman en su debida dimensión e importancia, las responsabilidades que les son conferidas por el Código Procesal Penal.

Los funcionarios policiales son administrativa, penal y civilmente responsables por el no o mal cumplimiento de sus deberes legales y de las instrucciones que conforme a la ley, les sean transmitidas por los fiscales o jueces.

Los fiscales, a partir de la comunicación recibida acerca de la existencia de un hecho punible, dentro de las 6 horas inmediatas establecidas en el Código, se erigen en directores del procedimiento investigativo. Deben por tanto diligenciar, tramitar o disponer las actuaciones que sean necesarias para su esclarecimiento, la aprehensión del autor, autores o partícipes y de cuantas medidas sean necesarias para asegurar el éxito de la investigación. Si retardaran o realizaran negligentemente las diligencias, serían responsables, administrativa, penal y civilmente del mal desempeño de sus funciones.

Así, por ejemplo, si no diligenciaran un pedido de allanamiento de la Policía Nacional, sin causa debidamente justificada, responderían administrativamente ante sus superiores y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o la justicia ordinaria.

Asimismo, si imputaran a una persona la comisión de un hecho punible, sin existir merito suficiente para ello, tendrían las mismas responsabilidades citadas precedentemente.

De igual manera, los funcionarios policiales que impidieren, retarden, desnaturalizaren, modificaren o alteren de cualquier manera las órdenes judiciales, tendrán que responder por ello ante la instancia pertinente. Ninguna directiva extrajudicial (presión política, proximidad de fecha de elecciones, elevada cantidad de ocupantes de un asentamiento, etc.) puede impedir su cumplimiento.

Es principalmente importante que la sociedad asuma conciencia de esta situación, para que no sea solamente la Policía Nacional la que lleva la enorme carga de responsabilidad por el aumento del índice de delitos. En ocasiones, los policías nos lamentamos por el elevado número de marginales tan fácilmente liberados de la Penitenciaría por falta de imputación o acusación, sabiendo que ellos inmediatamente volverán a

delinquir y que la sociedad lanzara gritos de protesta contra la “ineficiencia policial”.

El aumento de la delincuencia responde a múltiples factores sociales, económicos y políticos. La seguridad interna del país debe ser preocupación de todos los habitantes de la República, de gobernantes y gobernados, de paraguayos y extranjeros que habitan nuestro suelo patrio.

A la problemática económica, política y social, debe responderse con soluciones de igual naturaleza y no a través de medidas policiales de carácter represivo. Seguidamente se transcribe el artículo 61, que no merece comentario adicional.

Artículo 61. Poder Disciplinario: los funcionarios y agentes policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones de investigación o lo cumpla negligentemente, serán sancionados según su ley orgánica, sin perjuicio de su responsabilidad penal”.

En cuanto a la última parte del artículo 59. “La autoridad administrativa no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los fiscales o por los jueces”, se puede decir que en la actualidad, los oficios judiciales son canalizados a través de la Comandancia de la Policía Nacional, para luego ser derivados a las dependencias a encargarse de su ejecución. Tales trámites deben efectuarse sin dilatación, con la mayor celeridad posible.

II.1.6. Imposibilidad fundada de realizar un procedimiento

Pueden existir justificados impedimentos de hechos que imposibiliten o hagan riesgoso el cumplimiento de un mandato judicial, como ser la dificultad o imposibilidad de acceder al lugar, condiciones climáticas adversas, fuerte resistencia de los ocupantes de un previo usurpado,

existencia de gran cantidad de armas, carencia de suficientes efectivos policiales, entre otros.

Tales circunstancias deben ser inmediatamente comunicadas al Juez, para que este disponga cuanto corresponda en derecho.

Esta apreciación se funda en que deben considerarse ciertas situaciones excepcionales que la Policía debe sopesar. Las mismas podría acarrear consecuencias lamentables, como ser la pérdida de vida de sus efectivos o de las personas objeto del procedimiento, si se da cumplimiento al mandato sin la planificación adecuada.

Sería por tanto, un total contrasentido, que por el excesivo celo de cumplir estrictamente una orden judicial, expedida a veces sin el suficiente análisis de la situación de hecho en el lugar de su ejecución, se tenga que tener como consecuencia una situación de crisis mayor, traducida en pérdidas de vidas humanas u otras consecuencias graves.

II.1.7. Aclaraciones conceptuales contenidas en el Artículo 175 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Policial

II.1.7.1. Institución Profesional

La Policía Nacional es una Institución Profesional, no solamente por constituirse en un órgano esencial para la misma existencia del Estado, la Nación de la sociedad, sino también porque sus miembros deben mantenerse prescindentes de toda actividad política partidista explícitamente lo determinan la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Policial y otras leyes.

La Policía Nacional es una Institución Profesional. Consecuencia de ello es que trabajo de sus efectivos hoy día está reconocido y valorizado. La Policía empírica de otras épocas ha quedado de lado. Actualmente ella se ha vuelto técnica y científica.

La Policía Nacional tiene la obligación Constitucional de profesionalizar sus efectivos, a través de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, con el uso de tecnologías de punta y el racional despliegue de sus recursos humanos y materiales.

El Artículo de la Ley Nro. 222/93 Orgánica de la Policía Nacional, claramente así lo establece “la carrera Policial es la profesión técnica y científica que desarrollan ciudadanos juramentados para servir a la sociedad, conforme a la Constitución Nacional las Leyes. Se inicia en los institutos de formación Policial”.

Formar parte de ella exige tener muchas cualidades, no solamente de orden intelectual, sino también moral y vocacional. Sin una adecuada formación moral y elevada vocación de servicio, no es posible que un ciudadano se convierta en un buen policía.

En algunas instituciones Policiales extranjeras se exigen ser egresado universitario al postulante a agente de policía y en otras, la obtención de doctor o máster en alguna carrera universitaria, para la promoción a los grados de gerenciamiento o de dirección.

Por ejemplo, en la Policía Federal del Brasil, para la admisión de exige a los postulantes haber concluido una carrera universitaria, preferentemente de derecho, para luego de un ciclo académico de seis meses, egresar como agentes.

II.1.7.2. No deliberante y obediente

Esto no es un concepto “absoluto” mucho menos irrestricto, pus bien sabemos que en un Estado de Derecho tanto los componentes de la sociedad, como las entidades y, con más razón aun, los diferentes órganos del Estado, deben ajustar su desenvolvimiento a los mandatos de la Ley.

La interpretación de esta formulación constitucional no debe ser entendida como una limitación a los derechos fundamentales de los efectivos de la Policía Nacional. Tampoco debe ir en desmedro del desarrollo de su personalidad, como elemento positivo para la construcción de una sociedad mejor. No por pertenecer a una “institución no deliberante y obediente” al policía se lo debe considerar como un ciudadano de segunda o tercera categoría.

La prescripción Constitucional se refiere exclusivamente a la obediencia, a los mandatos de la Ley y a los de las autoridades legítimamente constituidas con el presupuesto de que tales mandatos deben ser constitucionales y legales pues de no ser así se exime a la Policía del deber de obediencia.

Se ha pretendido extender el alcance del concepto a una restricción limitada al accionar y desenvolvimiento del policía convirtiéndolo en una autómatas cumplidor de órdenes, sin espíritu crítico o analítico para desenvolverse profesionalmente.

Es todo lo contrario. El Policía está obligado a razonar, lógicamente y jurídicamente, a la luz de las disposiciones legales y de su experiencia, para la toma de decisiones en el campo profesional.

Así, al intervenir en un hecho punible, debe determinar en base a que norma lo hace, previo juicio de valor; si los sucesos reúnen las condiciones de tipicidad y anti juridicidad, para ser considerados punibles; o así de algún modo, se quebranta el orden público. Si el hecho causante de la intervención no reúne tales condiciones, debe abstenerse de efectuar procedimiento alguno.

El Artículo 3º, de la Ley Nro. 222/93, así lo precisa al decir: “La Policía Nacional ajustara el ejercicio de su función a las normas constitucionales y legales y fundara su acción en el respeto a los derechos humanos”.

En igual sentido debe comprenderse el Artículo 7º, de la Ley Nro. 222/93 Orgánica de la Policía Nacional, que expresa: “La Policía Nacional no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria. Las directivas u órdenes que se dicten contraviniendo tal prohibición, impondrán la extensión de obediencia”: y el numeral 2 (in fine), el Artículo 10, que dice: “Obedecer las órdenes e instrucciones de sus superiores conforme a la Constitución, la Ley y los reglamentos. Las órdenes e instrucciones manifiestamente inconstitucionales o ilegales eximirán del deber de obediencia”.

II.1.7.3. Carácter permanente

La Policía Nacional no está creada con una finalidad limitada en el tiempo y en el espacio. Ella responde a un imperativo que atañe a la seguridad de la misma existencia de la sociedad. Por ello forma parte del Estado, como órgano de uno de sus Poderes.

Es cierto, la sociedad puede en virtud de lo establecido en el Art. 2º de la Constitución de la República, optar por delegar la función de policía en varios órganos o por cambiar totalmente el sistema policial, como ocurrió 1992-93 (fusión de la Policía de la Capital con las Policías Departamentales).

Ello no implica la divisibilidad de la función de Policía ni la desnaturalización de los fines del organismo de seguridad. La función de Policía es única e indivisible, y los fines de la institución estarán siempre revestidos de los caracteres de imprescindibilidad, como presupuesto de la desmaterialización del “bien común”, fin último del Estado.

Es por eso que, la mayor eficiencia, mejor utilización de los recursos humanos y materiales, como también ahorro para las arcas públicas, lo ideal es que un solo organismo se encargue de ejercitar la función de Policía del Estado, sea en el aspecto preventivo como investigativo o represivo.

Concreción de este ideal y materialización de una expectativa largamente acariciada por el pueblo, constituyo la creación de la Policía Nacional en virtud de la Constitución Nacional de 1992, con un órgano permanente que unifica y amalgama las 18 organizaciones policiales que la precedieron.

La permanencia de esta institución en total carácter se construye sobre la credibilidad y confianza pública, la que se ganan con la excelencia del servicio.

Se llega a la excelencia con el empleo racional, proporcional y profesional de los recursos. Esto implica hacerlo dentro del marco de una planificación meticulosamente elaborada y de absoluto respeto a las Leyes y reglamentos. Para ello, el personal Policial debe ser fiel intérprete de que su labor principal es servir a la sociedad y acrecentar la sensación de seguridad y de confianza en la institución de la que forma parte. Su retribución será no solamente la satisfacción del cumplimiento del deber, sino el reconocimiento y apoyo de la sociedad a su policía.

Es por ello que cada integrante de la Policía Nacional debe tomar conciencia de que la existencia de la institución como órgano integrante del Poder Ejecutivo y como fuerza única, depende de su honestidad, patriotismo y profesionalismo.

Si la respuesta de la Policía Nacional, como órgano responsable de la seguridad interna de la Nación, no llena las expectativas públicas, es posible que el pueblo en uso de su poder soberano, atomice nuevamente a las Fuerzas Policiales en grupos minúsculos, cuyas consecuencias serían impredecibles.

II.1.7.4. Dependencia Jerárquica

La dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación debe entenderse que tiene carácter

eminentemente político. Deviene lógico comprenderlo así, ya que como órgano del Estado, la organización Policial no puede mantenerse ajena a la política de seguridad pública del estado, implementada por el Poder Administrador.

La seguridad interna es competencia exclusiva del estado. Entendiéndose la misma como, “la situación de hecho en la cual el orden público esta resguardado así como la vida, la libertad y de los derechos de las personas y entidades y sus bienes, en un marco de plena vigencia de las instituciones establecidas en la Constitución Nacional”, corresponde al Ministerio del Interior, sin perjuicio de otra áreas de su competencia, ejercer la “conducción política del esfuerzo nacional de la policía” (Art. 42 de la Ley Nro. 1.337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna).

La política de seguridad interna de la nación es manejada por el Poder Ejecutivo. Lo hace a través del Ministerio del Interior. Por tanto, las directivas e instrucciones en ese campo, le deben llegar a la Policía Nacional por ese medio. El Art. 5º de la Ley Nro. 222/93, interpreta cabalmente este principio doctrinario y con sencillez y claridad prescribe: “La Policía Nacional dependerá jerárquicamente del Poder Ejecutivo, con el que se vinculara por medio del Ministerio del Interior”.

La dependencia jerárquica de que habla la Constitución se refiere exclusivamente a la obligación del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, de establecer la policía de seguridad interna de la nación, por medio de la planificación estratégica.

No se la debe entender como injerencia en el manejo profesional y técnico, que compete exclusivamente al comando de la Policía Nacional y a los efectivos que la integran. Así se desprenden del Art. 150 de la Ley Orgánica Policial que dice: “El comando es el organismo máximo de las fuerzas policiales, responsable de la dirección, planeamiento,

coordinación, control y empleo de los recursos asignados a ellas”. El Art. Siguiente reafirma el criterio expresado, al asegurar que el comandante de la Policía Nacional “, es la autoridad máxima de la institución”.

La complejidad de la labor policial amerita actual con celo, alto nivel técnico de preparación y absoluta y precisión en la interpretación de la Ley. Es por ello que la Ley Nro. 222/93 clarifica los requisitos previos que el postulante debe reunir para ameritar la situación jurídica de oficial o suboficial (“Estado Policial”), que le permite ejercitar la función policial conforme a derecho (Artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Nro. 222/93 Orgánica de la Policía Nacional).

Por el expresado motivo, en las misiones especificadas conferidas a la Policía Nacional, no son admisibles la intromisión de personas no integrantes de sus cuadros, por ende sin la suficiente preparación y entrenamiento para ello, tales intromisiones conllevan graves riesgos de violaciones de los derechos fundamentales, amén del peligro de desviación de la altruista y muy elevada misión que la carga magna asigna a la institución guardiana del orden ciudadano, como ya ocurriera en épocas anteriores, inclusive recientemente, con las consecuencias negativas para la imagen de la institución y la que el país irradia al exterior. A ello hay que sumar la consecuente responsabilidad administrativa y penal de los hombres que, en la dirección de la institución, caigan en tales aberraciones.

La Policía Nacional no debe ser orientada con fines político-partidistas, ni debe responder a ningún partido político en particular.

La Policía es del Estado Paraguayo. Ella debe servir a todos, sin distinción de bandería política, raza, sexo, religión o cualquier otro tipo de discriminación. Si fuera manejada con criterio político sectario, serian innecesarios los institutos de formación, de capacitación y el de estudios superiores, dependencias policiales responsables de formar, capacitar y

actualizar permanentemente al personal, para un desempeño acorde a las modernas expectativas comunitarias.

La Constitución Nacional y otras leyes ya fijaron principios sólidos al respecto. La Policía Nacional y sus hombres componentes deben mantenerse ajenos a los avatares políticos. Algo que, por cierto, el policía está consolidando.

II.1.7.5. Jurisdicción

El Art. 1º de la Ley Nro. 222/93 prescribe que la Policía Nacional tiene jurisdicción en toda la República. Es decir que, las funciones, obligaciones y atribuciones concedidas en virtud del Art.6º de su Ley Orgánica, las puede ejercitar en cualquier punto del territorio nacional, aun en las aguas públicas o en el espacio aéreo, como lo reza el numeral del recitado artículo.

Por tanto, la Policía Nacional tiene una autoridad única, indivisible. Las delimitaciones jurisdiccionales de las Zonas, Jefaturas de Policías, Comisarias, Subcomisarias, etc., son meramente a los efectos organizativos.

El policía está facultado a ejercer sus funciones en cualquier lugar de la extensión geográfica de la República, con el solo requisito de actuar conforme a las prescripciones legales y reglamentarias. Aun el aviso a que el personal es compelido a dar la dependencia policial de otra jurisdicción donde va a llevar a cabo un procedimiento, constituye mero formalismo, que no va más allá de las reglas de cortesía, de buena educación y de respeto que, desde luego, debe primar entre funcionarios pertenecientes a una misma institución.

II.1.7.6. Estructura funcional jerarquizada

La Ley Orgánica Policial, en su artículo 2º, establece: “La Policía Nacional, como una Institución profesional, de estructura funcional jerarquizada, no deliberante y obediente”.

Habiéndose ya concedido convenientemente lo relativo a Institución Profesional y lo que deviene de la expresión no deliberante y obediente, se considera de mucha importancia para los componentes de la institución, ampliar el concepto de la expresión estructura funcional jerarquizada.

II.1.7.6.1. Correlación entre grados y niveles de mando

La formulación legal precedente es desarrollada en toda la extensión de la Ley Orgánica y en el Reglamento Orgánico Funcional.

En la primera hasta el nivel de Departamentos y grado de Comisario Principal, en el segundo para los niveles de mando y grados inferiores.

En uno y otro se define la organización estructural de las dependencias y el nivel de mando de sus titulares. Estos tienen la atribución, obligación y responsabilidad legal de cumplir y hacer cumplir la estructura orgánica funcional jerarquizada estipulada por la Ley y el Reglamento, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa al dar lugar su cumplimiento a acciones que pueden ser legítimamente ejercidas por el personal policial que se considere agraviado por las medidas administrativas dictadas en contraposición a las disposiciones legales y reglamentarias.

El efectivo cumplimiento de la misión exige desde luego, el respeto de la estructura orgánica y la cadena de mando, en perfecta concordancia con el riguroso respeto de la antigüedad en la designación de los miembros en las diferentes funciones o cargos.

De modo que la estructura funcional jerarquizada establecida en la Ley y en el Reglamento, no se limita al mero tratamiento respetuoso entre los componentes más antiguos o viceversa, de la institución, sino que extiende se refiere muy especialmente a que debe haber una estricta correlación entre los grados de dichos componentes y los niveles de mando de las funciones o cargos a que son asignados.

II.1.7.6.2. Promociones y ascensos

Para que la estructura organizativa funcional y jerarquizada conduzca a un nivel de excelencia a la institución, en busca de la pretendida “calidad total” en el servicio, y para que los mandos superiores no tengan el inconveniente relacionado con la selección de los hombres ideales para los cargos, las promociones o ascensos de los grados operativos (Oficiales. Subalternos) a los de gerenciamiento (Oficial Superiores), más aun a los de dirección (Oficiales o Comisarios Generales), deben adecuarse a las necesidades del servicio.

Deben por tanto ajustarse dichas promociones al marco establecido por la Ley y el Reglamento, considerando los requisitos académicos, de capacidad e idoneidad, imprescindibles para el buen desempeño en cada función.

Tratándose de un tema tan sensible a los sentimientos del personal el Reglamento debe prever en forma clara y precisa, el perfil ideal para cada grado; como asimismo, las puntuaciones y valoraciones otorgadas a las calificaciones obtenidas en los Institutos de Formación y Perfeccionamiento, como a los méritos y deméritos acumulados durante la carrera.

La Ley y el Reglamento deben buscar responder y satisfacer las más elevadas expectativas sociales, antes que las de índole personal y familiar, incluso con frecuencia de carácter vanidoso de cada uno de los integrantes de la Institución.

Respetando las normativas legales y reglamentarias, se evitaran las incomodidades, disgustos y finalmente el caos en que se desemboca, cuando el personal, al observar su incumplimiento busca y utiliza recursos extra institucionales para hacer valer lo que él cree en su legítimo derecho. Y la utilización de estos “recursos”, a la vez, desarrollan consecuencias disciplinarias negativas para el desenvolvimiento institucional e incomodidades para los mandos superiores.

II.1.7.6.3. La antigüedad

La exigencia de la Ley, enfatizada convenientemente en el ya transcrito Art. 2º, es imperativa y de cumplimiento obligatorio. Por ello, la antigüedad entre los efectivos se establece, en principio por el decreto de egreso de los Institutos de Formación y, posteriormente, por los de Promoción a los grados inmediatos superiores.

Fuera de su implicancia meramente estructural y orgánica, también conlleva el deber de subordinación de los menos a los más antiguos, para asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones y atribuciones establecidas en la Ley, los mandatos judiciales y las directivas e instrucciones de los superiores.

De no ser así, se corre serio riesgo de entorpecer o retardar el cumplimiento de los mandatos recibidos.

II.1.7.6.4. Remesas y ubicaciones

El antiguo concepto de la camaradería es meramente sentimental. Agrupa a Oficiales o Suboficiales de una misma promoción. El termino deriva de la costumbre. Carece de sustento jurídico. No existe “camarada” en el orden horizontal de la palabra. Existen, legalmente, solamente más o menos antiguos, superiores y subordinados.

De ello se desprende, que cuando un personal postergado y nos asciende con los otros integrantes de su promoción, se acopla a la remesa siguiente, debiendo por cuestiones de estricta justicia, ocupar el último lugar en la nómina de esta. Esto es así, porque cada remesa es estructurada por los Decretos correspondientes y no debe ser desarticulada o modificada por cusa no imputable a ninguno de sus integrantes.

Además, como la causa de la postergación de un ascenso es usualmente imputable al afectado, no es justo que a este se lo ubique a la cabeza de la promoción siguiente, en desmedro y ostensible violación de derechos adquiridos por quienes se encuentran en los primeros lugares de la misma.

Debe, por tanto, ubicárselo al final de la lista. De esa manera, no agravia el derecho de otro integrante de la remesa a que se adhirió, ni modifica la antigüedad de nadie.

II.1.8. La Fuerza Pública

La Fuerza Pública consiste en el poder coercitivo del Estado, para ser posible el cumplimiento de sus fines.

La ejerce el Estado en virtud del Poder Soberano que le delega el pueblo, ya que en este reside la soberanía, conforme a la Constitución Nacional. Sabemos de la indivisibilidad de la soberanía y de los aspectos de ella, el externo e interno. Su existencia como Estado Soberano, custodio de la integridad territorial de la República y defensa de sus autoridades legítimamente constituidas, garantiza a través de sus fuerzas militares; en tanto que a través de su Policía Nacional, la ejerce dentro del territorio de la República, manteniendo el orden público, preservando vidas y haciendas de los habitantes e investigando los hechos punibles bajo dirección judicial.

El Art. 4º de la Ley Nro. 222/93, precisa: “La Policía Nacional, como órganos de seguridad interna del Estado, podrá hacer uso de la Fuerza Pública, para el cumplimiento de su cometido”.

II.2. EVOLUCION HISTORICA EN EL ESTADO DE DERECHO

II.2.1. Breve Historia

La policía paraguaya fue creada el 8 de marzo de 1843, durante el Gobierno del Segundo Consulado integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Pedro Nolasco Fernández fue el primer Jefe de Policía y organizó la estructura interna de la institución que fue denominada Departamento de Policía de la Capital.

El 20 de junio de 1992, tras ser promulgada la nueva Constitución del país, surgió la Policía Nacional entre las instituciones designadas como Fuerza Pública, previstas en su artículo 172. La nueva agrupación policial, que unió las diversas fuerzas anteriormente encargadas del trabajo policial, tuvo en su dirección, por primera vez, un agente policial de carrera, el Comisario General Germán Gabriel Franco Vargas.

Uno de los más grandes es el Comisario General y Subcomandante Juan Erasmo Candía que subió a ese cargo desde muy joven, lastimosamente falleció en año 2.007.

Hasta el año 1992, en Paraguay existían 18 organizaciones policiales. Una de ellas denominada policía de la Capital, abarcaba la ciudad de asunción y las jurisdicciones de varias localidades cercanas a ella. La Jefatura de este era ejercida usualmente por un miembro de las FF.AA, al menos en los últimos años. Las 17 restantes funcionaban a cargo de los Delegado de Gobiernos, designados por el Poder Ejecutivo.

II.2.2. Policía en el Estado de Derecho

En el Estado de Derecho la Policía hace parte del derecho administrativo, sometida como tal a la Ley, sea esta la ley formal o Constitucional. Podrán variar las formas y medidas de su regulación legal, pero el principio fundamental sin excepciones es el de subordinación a la ley. No hay cabida en el estado de derecho para un "Poder de Policía" superior o anterior a la Ley. Por esta razón adoptamos la denominación de Derecho Policial y no la de "Poder de Policía", que arrastra la carga semántica de vaguedades e indefiniciones erráticas.

En efecto, como acaba de apuntarse más arriba, la defensa de la Constitución o preservación de la existencia del Estado se pretende con frecuencia legítimas medidas de policías contrarias a las leyes, porque lo que es antijurídico no puede ser al mismo tiempo jurídico. Más leal y conforme con principio de ética política sería que la autoridad o gobernante que se vea precisado a tomar tales medidas, las reconozca como son en verdad, afrontando la responsabilidad de sus consecuencias y sometiéndolas al juzgamiento de los órganos competentes, incluso del poder constituyente si esas medidas comportan innovaciones constitucionales.

II.2.3. Su Fundamento en la Constitución

En tanto que la Constitución consagra los derechos y las libertades, el derecho administrativo Policial, los reglamenta y limita. Aquella se ofrece como teoría de las libertades y este como teoría del orden la oposición es más aparente que real, porque no pueden existir derechos y libertades individuales ilimitadas, que de serlo se destruirían recíprocamente. De modo que el derecho policial correctamente entendido y ejecutado puede ser calificado como defensa de la libertad. Por lo demás, el fundamento del derecho policial se encuentra en la propia Constitución que, además

de autorizar la reglamentación por Ley de los derechos y libertades individuales, prevé la creación del Órgano Policial.

La autorización para reglamentar los derechos y las libertades es justamente el fundamento para la creación del Derecho Policial que esencialmente consiste en dicha reglamentación. En las Constituciones de 1870 y 1940 se establecía de manera general que los habitantes gozarán de los derechos y libertades consagrados en las mismas “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” y en las de 1967 y 1992 se establece lo mismo pero específicamente al enunciar, los derechos individuales, de familia, de educación, de cultura, de la salud, y de económicos. De los trabajadores y políticos.

En cuanto a los órganos policiales, no estaba prevista expresamente su creación en las Constituciones anteriores a la de 1967 pero se entendía obviamente que podían ser designados como cualesquiera otros órganos administrativos para la ejecución de las leyes. Lo prevé en el Art. 175 que expresa: “Tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como el derecho y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial investigar los delitos. La Ley reglamentará su organización y sus atribuciones.

II.2.4. Situación Jurídica de las Personas y de los órganos Judiciales

Lo que hay que destacar ahora es la situación jurídica resultante de las disposiciones Constitucionales respecto de las personas y de los órganos policiales. Para las primeras, existen los derechos y las garantías consagradas en la Constitución aunque no estén reglamentadas por la Ley. Lo expresa el Art. 45 “la falta de Ley reglamentaria no podrá ser innovada para negar ni menoscabar ningún derecho o garantía”. Además

de lo que prescribe en la primera parte del mismo artículo, la enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherente a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella.

En tanto que los órganos policiales no tienen más atribuciones que las que le confieran las Leyes reglamentarias. Así lo prescribe inequívocamente el Art. 175 transcrito más arriba. Y desde luego surge la interrogante ¿Qué atribuciones podrían invocar los órganos policiales si no hay leyes reglamentarias que ejecutar? Los derechos, garantías, la libertad de las personas son, el principio, y las reglamentaciones y limitaciones policiales que deben ser autorizadas por la Ley.

II.2.5. Definición del Derecho Policial

Con los caracteres que hemos atribuido al derecho policial, puede definirse como sector del derecho administrativo que tiene por finalidad preservar, bajo amenaza de coacción inmediata, el orden legalmente establecido para la protección de las personas y de la comunidad.

Dada la inseguridad de los trazos que lo delimitan, su definición tiene que ser necesariamente de valor relativo. Pero esta relatividad e inseguridad no tiene mayor importancia, porque de cualquier manera el derecho policial no puede escapar del marco jurídico del derecho administrativo en el cual se haya inserto. En realidad no se trata más que de aplicar las reglas ya conocidas del derecho administrativo a las llamadas materias de policía. Cabe preguntar entonces que objeto tiene insistir en delimitar un ámbito jurídico que no es, más que un sector de otro que lo comprende y resuelve las cuestiones que pueden suscitarse en el mismo.

En primer lugar, existe el interés teórico de conocer en que consiste la policía que se menciona y seguramente seguirá mencionándose no solo en el lenguaje común sino también en la doctrina.

En segundo lugar, hay en ello algún interés práctico como el de distinguir las funciones policiales de las asistenciales. Las primeras, que consisten en imponer obligaciones y prohibiciones, requieren expresa autorización de la ley o del reglamento autorizado por la ley, por aplicación del precepto Constitucional del Art. 9 in fine, en tanto que las funciones asistenciales pueden ser ejercidas con la sola asignación de créditos en la ley de presupuesto que equivale a la autorización legal para actuar y prestar servicios. Conanálogo fundamento constitucional existe un derecho policial penal que no hay ni puede haber en el derecho asistencial.

II.2.5.1. Fuentes del Derecho Policial

- a) **La Constitución Nacional:** que conforme a lo dicho anteriormente, autoriza la reglamentación de los derechos, garantías y obligaciones consagradas en la misma, bajo la condición de que no alteren su ejercicio, prevé la creación de órganos de “policía cuya organización y atribuciones serán regladas por Ley” (Art.175) y además, contiene prescripciones de inmediata y directa aplicación aunque no estuviesen reglamentadas como la del arresto “por orden escrita de autoridad competente” (Art. 12), la prohibición de “torturas y tratos crueles e inhumanos” (Art.5), la inmunidad de los “actos privados” (Art.33).
- b) **Las Leyes:** que contienen disposiciones de carácter policial en las más diversas materias: seguridad personal y del orden público; de sanidad, comercial e industrial; de la moneda, crédito y bancos; y designan al mismo tiempo los órganos de aplicación.
- c) **Los reglamentos de policía:** que deben ser necesariamente autorizados en la Ley, en el que se enuncian las

clases, características y condiciones de validez de los reglamentos en general, las que tienen plena vigencia en materia policial. En la medida en que la Ley confiere competencia exclusiva a los órganos de aplicación para dictar dichos reglamentos, estos órganos son “autónomos” en el sentido de que se dictan sus propias normas, aunque estén rigurosamente sometidos a superiores jerárquicos, como en el caso de la policía de seguridad que recibe órdenes directas del Presidente de la República y del Ministro del Interior. Aun en estos casos quien tiene competencia para dictar, modificar o derogar los reglamentos de policía es el que ha sido investido de la facultad reglamentaria y no superior jerárquico.

II.2.5.2. Caracteres del Derecho Policial

Las específicas que generalmente se atribuyen al derecho policial se refieren:

- a) A su finalidad, que es el mantenimiento del orden.
- b) Al medio de ejecución, que es la coacción.
- c) Al carácter preventivo de sus disposiciones.

De primera intención no puede afirmarse que estas notas conceptuales sean exclusivas del derecho policial, puesto que son propias del derecho en general. Este consiste, en efecto, esencialmente en un determinado ordenamiento que por su carácter coactivo tiene potencialmente efecto preventivo sobre la conducta de las personas. Piénsese, por ejemplo, en el derecho penal que por sola prescripción de penas es de presumir que previene y evita la comisión de más delitos de los que en realidad ocurren. Esta indeterminación del concepto les ha llevado a diferentes autores a propugnar la eliminación del “concepto policía”. Por consiguiente, es preciso llevar a cabo un examen más profundizado de los caracteres arriba enunciados, para ver si son suficientes para

delimitar un derecho policial diferenciado dentro del derecho administrativo General.

II.2.5.2.1. Mantenimiento del Orden

La finalidad del Derecho policial no es preservar el ordenamiento jurídico general sino una parte del mismo: la que atañe en forma directa e inmediata a la protección de la integridad física, salud y derechos fundamentales del individuo e intereses vitales de la comunidad. Lo mismo puede decirse sin duda del Derecho Penal pero este prevé y castiga hechos muchos más graves. La diferencia se hace notar cuando simples transcripciones de carácter policial llegan a adquirir tal peligrosidad que pasan a ser calificadas como delitos del Derecho Penal, como la destrucción de señales en las carreteras y el tráfico de drogas, que han sufrido esa transformación. Respecto del derecho privado puede anotarse también esta diferencia: que el restablecimiento de los derechos conculcados compete a los tribunales, en tanto que a la policía solamente la preservación de un orden que podríamos llamar "provisional", hasta que lleguen a intervenir los jueces, evitando que las personas se hagan justicia por sí mismos.

Y lo mismo en cuanto al llamado "orden público" que consiste en el orden material opuesto a la perturbación, especialmente en lugares públicos, y el ejercicio de los derechos de carácter político respecto del cual la policía se limita o de limitarse a asegurar que se mantenga dentro de los cauces establecidos en la Constitución y en las leyes.

La perturbación del orden es el enemigo de la policía. Perturbación del orden público como sería una manifestación tumultuaria, perturbación del orden Sanitario como la de no vacunarse o descuidar las condiciones higiénicas en locales abiertos al público, perturbación del orden monetario como la de efectuar transacciones monetarias fuera de las

instituciones autorizadas a operar en cambios, perturbación del orden comercial como la de no observar precios máximos fijados para artículos de primera necesidad o no exhibirlos en carteles reglamentarios.

Mantenimiento del “buen orden” suele ser la finalidad asignada a la autoridad policial, sea de seguridad, sanitaria, o lo que fuese. Por “buen orden” debe entenderse lo establecido mediante obligaciones y prohibiciones en las leyes y en los reglamentos, como la de vacunarse, vender a los precios máximos fijados regularmente, en los ejemplos precedentes, y no el buen orden según lo entiende la autoridad, salvo que la ley o el reglamento le haya reservado expresamente la facultad de calificarlo como tal en determinadas circunstancias.

II.2.5.2.2. Carácter Preventivo

A diferencia del derecho penal que, salvo raras excepciones, sólo reprime daños causados, el derecho policial preferentemente previene y sanciona hechos no porque efectivamente causen daños sino porque pueden causarlos.

Y si también eventualmente los reprime una vez producidos es por no haberse cumplido las medidas preventivas, como la sanción aplicada con motivo de un accidente de tránsito por no haberse observado las condiciones reglamentarias de velocidad, señales de semáforo, etc. La reparación del daño causado y la represión del hecho por su peligrosidad como delito, pertenecen a la jurisdicción de los tribunales, no a la policía. Por lo demás, a título de que el derecho policial es de carácter preventivo, la policía de cualquier clase que sea, no puede adoptar medidas preventivas a su antojo.

Las medidas preventivas y represivas deben estar autorizadas en la ley o reglamento, sin perjuicio de que la misma forma se le conceda a la autoridad la facultad de decidir qué medidas preventivas serán consideradas necesarias en determinadas circunstancias, dentro de

las limitaciones impuestas por los derechos y libertades constitucionales, se entiende, y salvo también las prohibiciones especiales como la censura previa.

II.2.5.2.3. El uso de la Coacción

La coacción que es la nota esencial del derecho en general, aparece en el derecho policial bajo una forma específica, no solo como amenaza sino con la inminencia de su aplicación inmediata en caso de contravención de las disposiciones policiales.

La autoridad policial aplica por si misma las sanciones previstas sin recurrir a los tribunales, incluso puede aplicarlas sin sumario administrativo previo cuando es una urgencia, como en el caso de comiso de artículos de alimentación en mal estado de conservación expuestos para la venta o cuando desde luego es imposible la instrucción previa de sumario como el arresto de un ebrio en lugares públicos. El sumario se instruye tan pronto sea posible, debiendo quedar abiertas las vías para la “defensa en juicio” del particular afectado, en todos los casos.

Es la llamada “ejecutividad” del acto administrativo. Si bien es una cualidad que hemos atribuido al acto administrativo en general, en el derecho policial resalta aún más como amenaza coactiva de aplicación inmediata.

II.2.5.2.4. Carácter negativo de las Normas Policiales

Podríamos agregar una nota diferencial más, buscando precisar el concepto de Derecho policial. Es el de carácter negativo de sus normas en el sentido de que solo tratan de evitar daños mediante obligaciones y prohibiciones impuestas a los particulares y no promueven medidas para su bienestar o para el bien de la comunidad. Ciertamente que la primera

condición para la asistencia y el fomento de ciertas actividades, es la preservación de daños.

La obligación de quemar los rastrojos de algodón, por ejemplo, es una norma de policía agrícola que sirve al mismo tiempo para el fomento de su cultivo, pero es de carácter negativo a diferencia de las normas que obligan a los agentes del Ministerio respectivo a prestar asistencia técnica y crediticia para dicho cultivo.

Por otra parte hay obligaciones como las tributarias que son también de carácter negativo en el sentido que estamos enfocando, pero no tienen por objeto evitar daños como las de policía sino satisfacer las necesidades públicas y bien de la comunidad. Esta nota negativa de las normas policiales es la que más facilita distinguir las del derecho positivo, de las de carácter asistencial o de fomento.

Así, en la Ley 422/73 son de policía forestal las normas que prohíben y reprimen la depredación de los bosques y de asistencia o fomento de las que promueven e incentivan la reforestación.

II.2.5.3. Actos de ejecución

Actos de ejecución del Derecho Policial, o si se quiere medio de ejercicio de la función policial, son los actos administrativos individuales regidos en un todo por las reglas propias del acto administrativo, especialmente en cuanto las condiciones de su regularidad y validez.

Consisten en la aplicación de la ley o del reglamento al caso concreto para una persona determinada o grupo determinado de personas, actos de esta clase, típicos de la policía son las órdenes y los permisos y autorizaciones.

II.2.6. Materias de Policía

En el Estado liberal las materias de policía eran muy limitadas: seguridad de las personas y de sus bienes, salubridad y orden público en una palabra, la seguridad en sentido muy restringido. Pero esta seguridad en la compleja sociedad moderna se requiere de muchísimos y variados ordenes tan exigentes como la de salvaguarda de la vida misma, como la preservación de las aguas y del aire contra las contaminaciones, la fijación de precios de artículos de primera necesidad, de control de la oferta pública de títulos y valores, para no citar sino, algunas de las materias más alejadas del concepto clásico de seguridad que sin embargo caben a idéntico título de la misma noción.

Ante el extraordinario movimiento intervencionista que le ha llevado al Estado a emprender obras de infraestructura crear empresas públicas y servicios de asistencia general, es un hecho que suele pasar desapercibido que al mismo tiempo se ha extendido las funciones de policía, abarcando prácticamente todas las esferas de la vida individual y colectiva.

Se dice, incluso entre los autores, que el Estado puede ejercer funciones de la policía en todas estas materias, incurriendo en el grave error de atribuir al ente abstracto, Estado las atribuciones que en Derecho Positivo compete a los distintos poderes, con el peligro que de cualquier órgano ejecutivo se atribuya funciones de policía del Estado el único poder que puede autorizar intervenciones de policía en dichas materias es el Poder Legislativo, con la salvaguarda y limitaciones contenidas en la Constitución Nacional; los órganos competentes para ejecutar el Derecho Policial así creado son el poder Ejecutivo con las atribuciones que les confiera la Ley, con el llamado a conocer y decidir las cuestiones contenciosas que surjan a su aplicación son los Tribunales y los Jueces del Poder Judicial.

Bastante grave es ya la admisión de intervenciones policiales en tan variadas materias, para hacerla aún más peligrosa con la equívoca atribución de policía al estado en abstracto. El derecho policial que aquí se estudia es genérico, comprensivo, del que rige en todas las materias, no solamente en la llamada “policía de seguridad”, y las reglas que tratamos de establecer tienen la pretensión de ser válidas para todos los órdenes o especies de policía.

II.2.7.Su origen en la Constitución Nacional

La Constitución Nacional prevé en su Artículo 172, que “La Fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y Policiales”.

Para la defensa de la soberanía Nacional, “custodiar la integridad territorial”, se instituyen la Fuerzas Militares; en tanto que, para el mantenimiento del orden interno e investigar los hechos punibles, las fuerzas policiales.

La previsión Constitucional en relación a la institución Policial es ampliada y aclarada en el Artículo 175, que expresa: “La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo, encargado de la seguridad interna de la Nación.

Dentro del marco de esta Constitución y de las Leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos, la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección Judicial, investigar los delitos. La Ley reglamentara su organización y sus atribuciones.

El mandato de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los Policiales en servicio activo no podrán afiliarse a partido o movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.

La creación de cuerpos de Policía independientes podrá ser establecida por la Ley, la cual fijara sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito municipal y en el de los otros poderes del Estado.

II.2. Los Derechos Humanos

Desde su expreso reconocimiento por la triunfante Revolución Francesa, en 1789, con su divisa libertad, igualdad y fraternidad, los derechos del hombre y del ciudadano tuvieron tanta difusión y reconocimiento, homologados oportunamente por las Naciones Unidas bajo la denominación de Derechos Humanos.

Hoy día no se admite que una legislación no los tenga expresamente reconocidos, más aun tratándose de la que organiza un órgano que tiene como responsabilidad primordial resguardar y garantizar su observancia irrestricta.

Dentro de este contexto se ubica sin lugar a dudas el Art. 3º de la Ley Nro. 222/93, al establecer: “La Policía Nacional ajustara el ejercicio de su función a las normas Constitucionales y legales, y fundara su acción en el respeto a los derechos humanos”.

Esta imperativa disposición legal, “fundará su acción en el respeto a los Derechos Humanos”, obliga al personal policial a ajustar estrictamente todo su procedimiento a las garantías que al respecto contienen la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Policial, el Código Procesal Penal y otras Leyes, so pena de incurrir en grave responsabilidad penal.

Lastimosamente, las argumentaciones de organizaciones encargadas de velar por los Derechos Humanos, de que “solo quienes representan al Estado cometen infracciones contra los Derechos Humanos”, son utilizadas con fines persuasivos y para desalentar la acción policial.

La distorsionada interpretación y el extremado celo con que son protegidos los que corresponden a delincuentes y marginales, ocasionan ostensible perjuicio a la ciudadanía honrada, cuyo derecho a una vida segura, normal y tranquila, es permanentemente violado por aquellos.

Las actividades de las citadas organizaciones constituyen gestos altruistas y dignos, pero cabría recomendarles al respecto un profundo examen, en que se ponga énfasis de toda persona honrada tiene el legítimo derecho de “ser protegida en su libertad y en su seguridad” y en que se incluya también el tratamiento y análisis de los Derechos Humanos de las víctimas. De los propios policías y los familiares de estos, los cuales hasta ahora no fueron objeto de estudio alguno, no obstante el rechazo a todo tipo de discriminación establecido por la Constitución Nacional (Art. 46).

No es justo que a quienes más se les exija resguardar, respetar y garantizar los Derechos Humanos, no se les reconozca y respete los suyos propios; como tampoco es justo que la policía haga uso abusivo de la Fuerza Pública. La observación y el respeto a los Derechos Humanos deben ser cumplidos con absoluta imparcialidad y ecuanimidad.

Las doctrinas contemporáneas que buscan modernizar los sistemas policiales, para una más eficiente prestación de servicio, exigen que los policías sean tratados con respeto si se pretende que ellos protejan la dignidad humana.

Para ello es imperativo que definitivamente se deseche el avejentado concepto del Policía Deshumanizado, “con muchas obligaciones y sin

ningún derecho”, “el soldado descansa en la tumba” y otros trasnochados conceptos, que pretenden someter al policía a un régimen de esclavitud moderna, soslayando sus derechos fundamentales. Se debe en la sociedad moderna considerar al agente de policía realmente tal como es, parte integrante de la sociedad y que como tal cumple un papel determinado por esa misma sociedad, durante un tiempo determinado, dentro de un marco legal establecido, debiendo, por tanto, sus derechos ser respetados como los de cualquier otra persona.

Los policías no son seres de otro mundo. Son ciudadanos como otros, con obligaciones familiares y comunitarias. Sus conyugues, hijos, padres, hermanos, parientes y amigos, son parte de la misma sociedad. Los policías también lo son. Así deben sentirse, y la sociedad así los debe considerar.

Por ello, se debe concluir diciendo que, respetando y reconociendo los derechos y dignidades de los miembros de su Policía, el pueblo puede tener plena seguridad que tendrá como retribución no solo una apreciación más justa y real de la importancia del respeto, consideración y garantía de tales derechos por parte de los policías, sino mayor celo y dedicación por estos en garantizarlos a la sociedad a que se deben.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

III.1. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

III.1.1. Enfoque de la investigación: cualitativo o fenomenológico

En cuanto al enfoque o paradigma de esta investigación, la misma es abordada cualitativamente, porque los datos recolectados no son medibles, son cualitativos y el estudio de la realidad se realiza en forma holística o global, es decir en su conjunto sin necesidad de fraccionarlo en dimensiones e indicadores a los efectos de su procesamiento y análisis. El objetivo es comprender la situación relacionada a la institución policial.

III.1.2. Tipo y Nivel de Investigación

La elaboración del presente trabajo de investigación es de carácter hermenéutico, pues la labor del investigador consistió en una tarea de análisis, interpretación y la comprensión de los datos buscados y hallados en relación a la institución destinada a la seguridad interna del país.

III.1.3 Diseño de la Investigación

Cuando se realiza una investigación de paradigma cualitativo el diseño empleado se denomina emergente, es decir flexible, esto significa que a medida que se va explorando el problema, las líneas de acción de la investigación se van modificando de acuerdo a la necesidad.

III.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La estrategia de recolección de información utilizada fue el de revisión o consulta documental, de materiales doctrinarios, legislaciones afines, jurisprudencias, notas y comentarios en general referentes al tema investigado.

El método aplicado fue el de análisis de los contenidos calificados, recopilados en relación a lo investigado llegándose a la comprensión, interpretación, síntesis y consecuente formación del conocimiento y del nuevo contenido con el que se esclarecería los cuestionamientos planteados al inicio de esta tarea investigativa.

III.3. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los documentos doctrinarios, legislativos, jurisprudenciales y afines recopilados son de fuente calificada y fidedigna, con lo que se asegura el resultado claro y preciso de lo que se ha investigado.

Toda la información obtenida de libros, leyes, revistas judiciales, páginas web, etc. fue leída, interpretada, y aplicada a la necesidad de la investigación y del autor.

CAPÍTULO IV

EL RESULTADO

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Como conclusión se puede señalar que la Policía Nacional, es una Institución profesional, de estructura funcional jerarquizada, no deliberante y obediente, cuya función primaria es la seguridad interna. Deriva de la función de policía del Estado. La misma es única, indivisible y se funda en que constituye la expresión de la soberanía del Estado, la cual como se sabe es indivisible.

El sistema jurídico nacional se ocupa de la organización y funcionamiento de la institución policial en nuestra Constitución Nacional y en la Ley Orgánica policial. La Policía Nacional depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo, con el que se vinculará por medio del Ministerio del Interior.

La ley 222 Orgánica de la Policía Nacional, especifica claramente que la institución proveerá de los recursos humanos y logísticos, o sea personal y material, que sin estos elementos básicos será imposible el logro de los objetivos señalados en la Constitución Nacional.

Estructuralmente la ley orgánica citada hace referencia al Estado Policial, como la situación jurídica del Oficial, Cadete, Suboficial y Conscripto, que integran la Policía Nacional. Invisten el Estado Policial, el Oficial y Suboficial en actividad, disponibilidad, inactividad y retiro temporal o absoluto. Igualmente el Cadete y el Conscripto que revistan en actividad.

Ahora la Carrera Policial es la profesión técnica y científica que desarrollan ciudadanos juramentados para servir a la sociedad conforme a la Constitución Nacional y las Leyes. Se inicia en los institutos de

Formación Policial.En la Carrera Policial se reconocen:Cuadro Permanente de Oficiales; y,Cuadro Permanente de Suboficiales.

Los grados de Oficiales de la Policía Nacional comprenden:

a) Oficiales Comisarios

1. Comisario General Comandante
2. Comisario General Director
3. Comisario General Inspector

b) Oficiales Superiores

1. Comisario Principal
2. Comisario
3. Subcomisario

c) Oficiales Subalternos

1. Oficial Inspector
2. Oficial Primero
3. Oficial Segundo
4. Oficial Ayudante

Los grados del Cuadro permanente de Suboficiales comprenden:

1. Suboficial Superior
2. Suboficial Principal
3. Suboficial Mayor
4. Suboficial Inspector
5. Suboficial Primero
6. Suboficial Segundo
7. Suboficial Ayudante

En cuanto al régimen disciplinario se refiere, por imperio de la ley orgánica policial queda a cargo exclusivo del encargado del Dpto. a través del Dpto. de personal, la aplicación del control disciplinario, la solicitud a apertura de sumarios en tanto y cuanto se detecten algún tipo de incumplimiento dentro de las actividades del sub alterno. El

proceso pertinente ante un caso de sanción, es elaborar un informe al Departamento de Personal, de modo a dejar precedente en ficha o legajo del personal y proceder conforme a derecho.

En materia presupuestaria se puede acotar que en nuestro país todas las necesidades básicas adolecen de una deficitaria asignación en el Presupuesto General de la Nación, no obstante y considerando la circunstancia del protagonismo en la comisión de hechos delictivos de personal policial, el salario del personal policial ha sido reconsiderado y recategorizado en los últimos años, buscándose de esa forma la disminución de la participación de personal policial en hechos delictivos.

Como corolario se puede enfatizar que el sistema jurídico constitucional-legal ha confiado en la institución policial la seguridad interna del país y por ende la de la población, por tanto, toda persona que decida formar parte de la institución policial debe guiar su accionar llevado por motivación intrínseca y trascendental impulsado por vocación y espíritu de servicio, respectivamente y no por motivación extrínseca de llegar a obtener dinero en forma ilícita, utilizando la institución policial y la confianza depositada en ella.

BIBLIOGRAFIA

CONSTITUCIÓN NACIONAL 1992. Disponible en Lex Paraguay Versión 4.2 – Octubre del 2006.

MIGUEL ANGEL PANGRAZIO CIANCIO. Derecho Administrativo. Editorial internacional. Asunción 2.005.

MANUAL POLICIAL TOMO XXII CODIGO PENAL. Ley N° 1.160/97. Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional. Asunción.

MANUAL POLICIAL TOMO XXII CODIGO PROCESAL PENAL. Ley N° 1.286/87. Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional. Asunción.

CRIO. PPAL. OSCAR A. ROTELA G. MANUAL POLICIAL TOMO XXI. El Régimen Disciplinario y la Justicia Policial. Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional. Asunción 1.998.

JUAN CARLOS JARA y TIRIFILO ZARACHO CORONEL, MANUAL POLICIAL TOMO XXIV. La Policía Nacional en el Nuevo Sistema Penal. Departamento de Publicaciones de la Policía Nacional. Asunción.

ANEXO: 1

LEY 222/93

ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DE LA ORGANIZACION, FUNCIONES Y FINES DE LA POLICIA NACIONAL

Artículo 1º.- Esta Ley establece la organización, funciones, atribuciones y fines de la Policía Nacional, con jurisdicción en toda la República.

Artículo 2º.- La Policía Nacional, como integrante de la fuerza pública, es una institución profesional, de estructura funcional jerarquizada, no deliberante y obediente.

Artículo 3º.- La Policía Nacional ajustará el ejercicio de su función a las normas constitucionales y legales, y fundará su acción en el respeto a los derechos humanos.

Artículo 4º.- La Policía Nacional, como órgano de seguridad interna del Estado, podrá hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 5º.- La Policía Nacional dependerá jerárquicamente del Poder Ejecutivo, con el que se vinculará por medio del Ministerio del Interior.

Artículo 6º.- Serán funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional:

- 1.** Preservar el Orden Público legalmente establecido.
- 2.** Proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes.
- 3.** Prevenir la comisión de delitos y faltas mediante la organización técnica, la información y la vigilancia.
- 4.** Investigar bajo dirección judicial los delitos cometidos en cualquier punto del territorio nacional, en las aguas públicas o del espacio aéreo.
- 5.** Intervenir de oficio o por denuncias los hechos delictuosos, preservar el cuerpo del delito y secuestrar los instrumentos del delito que puedan servir en la investigación, labrando acta de lo actuado, expedir copias a quienes los requiera y remitir las actuaciones a la autoridad competente en el término legal.
- 6.** Solicitar de los jueces la autorización correspondiente para allanar domicilios en los casos de prevención de delitos, pesquisas o detención de delincuentes. Esta autorización no será necesaria para entrar a establecimientos públicos, centros de reunión o recreo y demás lugares abiertos al público en las circunstancias previstas en la Ley.
- 7.** Solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera.
- 8.** Citar o detener a las personas conforme a la Ley y en el marco estatuido por la Constitución Nacional. La comparecencia de los citados deberá efectuarse en días y horas hábiles
Y ellos serán recibidos y despachados en el día y hora señalados. Toda demora será considerada abuso de autoridad.
- 9.** Detener a las personas sorprendidas en la comisión de delitos y a los sospechosos, en la forma y por el tiempo establecidos en la Constitución Nacional y las leyes, haciéndoles saber la causa de la detención y los derechos que le asisten, poniéndolas a disposición de juez competente.
- 10.** Mantener y organizar en todo el territorio nacional el servicio de identificación personal, archivo y registro de antecedentes y del domicilio de las personas.

- 11.** Expedir Cédulas de Identidad, Pasaportes, Certificado de Antecedentes, de Vida, de Domicilio, de Residencia y otros documentos relacionados con sus funciones.
- 12.** Mantener copia actualizada del registro del parque automotor proveída por la Dirección General de los Registros Públicos.
- 13.** Ejercer la vigilancia y el control de las personas en la frontera nacional.
- 14.** Organizar el registro de extranjeros y controlar de entrada y salida de éstos conforme a la Ley.
- 15.** Proceder a la búsqueda de las personas desaparecidas, así como de las cosas pérdidas o sustraídas para restituir las a sus legítimos propietarios.
- 16.** Velar por las buenas costumbres, la moralidad pública y reprimir los juegos ilícitos las actividades prohibidas de acuerdo con las normas legales pertinentes.
- 17.** Reglamentar la tenencia de armas de uso civil y organizar el registro respectivo, de conformidad a las leyes vigentes.
- 18.** Garantizar las reuniones en lugares públicos preservando el orden y protegiendo los derechos de terceros.
- 19.** Comunicar a la autoridad judicial el fallecimiento de personas sin parientes conocidos y adoptar las primeras medidas cautelares de sus bienes.
- 20.** Cooperar y coordinar con el organismo responsable en el control y la prevención de la producción, comercialización, tráfico, consumo, uso y tenencia de drogas y estupefacientes de acuerdo a los Tratados internacionales y las Leyes vigentes en la materia.
- 21.** Proteger las instalaciones de conducción y provisión de energía eléctrica, oleoductos, gasoductos, aguas corrientes, telefónicas y otros.
- 22.** Prevenir y combatir los incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida, la seguridad y propiedad de las personas.

- 23.** Prevenir y reprimir las actividades relacionadas con el tráfico ilegal de personas, especialmente de mujeres y niños, de acuerdo a las normas legales pertinentes.
- 24.** Fiscalizar las actividades de los detectives particulares, empresas de vigilancias, serenos y de quienes ejerzan funciones afines.
- 25.** Fiscalizar con orden judicial, los registros de personas en hoteles, hospedajes y establecimientos afines.
- 26.** Cooperar con los organismos responsables en el control de la asistencia de menores en las salas de juegos de azar y espectáculos públicos para mayores.
- 27.** Controlar conforme a la Ley el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas.
- 28.** Dictar reglamentos y edictos para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con sus facultades regladas.
- 29.** Reglamentar e uso de uniformes, armas, equipos y materiales de la institución.
- 30.** Formar reservas para la defensa nacional.
- 31.** Realizar intercambios de información a nivel nacional e internacional y cooperar con instituciones similares en la prevención e investigación de la delincuencia.
- 32.** Prestar auxilio a las personas e instituciones que legalmente lo requieran.
- 33.** Coadyuvar en la realización de las pericias que soliciten los Tribunales y Juzgados de la Nación u otros organismos nacionales para la averiguación de hechos delictuosos.
- 34.** Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las funciones que por la Constitución Nacional y por esta Ley se le asignan.
- 35.** Coordinar con las Municipalidades y otras instituciones el control del tránsito en las vías terrestres habilitadas para la circulación pública.
- 36.** Dar cumplimiento a los mandatos judiciales.

Artículo 7º.- La Policía Nacional no podrá ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria. Las directivas u órdenes que se dicten contraviniendo tal prohibición, impondrán la exención de obediencia.

TITULO II

DE LA SITUACION JURIDICA DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL

CAPITULO I

DEL ESTADO POLICIAL

Artículo 8º.- El Estado Policial es la situación jurídica del Oficial, Cadete, Suboficial y Conscripto, que integran la Policía Nacional y que estará definida en esta Ley, en los Decretos y Reglamentos que en base a ella se dicten.

Artículo 9º.- Invisten el Estado Policial, el Oficial y Suboficial en actividad, disponibilidad, inactividad y retiro temporal o absoluto. Igualmente el Cadete y el Conscripto que revistan en actividad.

Artículo 10.- Son derechos, obligaciones y prohibiciones para el personal policial en actividad:

- 1.** Desempeñar las funciones que competen a su grado, situación de revista y destino policial.
- 2.** Obedecer las órdenes e instrucciones de sus superiores conforme a la Constitución, la Ley y los reglamentos. Las órdenes e instrucciones manifiestamente inconstitucionales o ilegales eximirán del deber de obediencia.
- 3.** Recibir los honores correspondientes a su grado y cargo.
- 4.** Ser remunerado de acuerdo a su grado, conforme a los derechos laborales establecidos en la Constitución Nacional y las leyes. Los sueldos y demás beneficios serán fijados en el Presupuesto General de la Nación.

- 5.** Recibir asistencia médica integral gratuita para sí y sus familiares con derecho a pensión, conforme a la reglamentación respectiva.
- 6.** Gozar de vacaciones anuales pagas de acuerdo al grado y la reglamentación que se dicte.
- 7.** Realizar estudios universitarios o de especialización y perfeccionamiento policial en institutos nacionales o extranjeros, la cual constará en su foja de servicios.
- 8.** Utilizar en caso de emergencia para proteger la vida y los bienes de las personas cualquier medio de transporte y comunicación disponibles, comunicando el hecho a la autoridad judicial en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas.
- 9.** Recibir a su fallecimiento los honores fúnebres que por reglamento correspondan a su grado.
- 10.** El grado jerárquico que inviste el policía es permanente y no se limitan a su tiempo de servicio.
- 11.** Los Oficiales y Suboficiales recibirán destino en dependencias de la institución.
- 12.** El uso del uniforme y de sus armas reglamentarias.
- 13.** La posesión del grado y la estabilidad en sus funciones de las que no podrán ser privados sino por decisión fundada en Ley.
- 14.** El Hospital de la Policía Nacional y sus dependencias son de uso exclusivo del personal policial y familiares con derecho a pensión, salvo que por disposición judicial se disponga la internación en dicho hospital de otras personas. Su funcionamiento será reglamentado por Ley.
- 15.** El retiro con el haber respectivo para sí o en su caso la pensión para los deudos que tengan derecho a ella.
- 16.** El Personal de la Policía Nacional agraviado u ofendido, podrá hacer uso de sus derechos como persona y ejercer las acciones correspondientes en salvaguarda de su honor, conforme a la Ley.
- 17.** El personal de la Policía Nacional desarraigado por razones de destino, tiene derecho a vivienda para sí y su familia.

18. El Personal de la Policía Nacional sometido a sumario administrativo, tendrá derecho a nombrar abogado defensor conforme a lo establecido en el Artículo 17 numeral 5 de la Constitución Nacional.

19. Al personal policial cualquiera sea su antigüedad y la causa de su alejamiento, que no se acoja al beneficio jubilatorio previsto en esta Ley, se le devolverá su aporte, conforme al reglamento vigente. Este derecho es imprescriptible.

Artículo 11. El personal de la Policía Nacional en servicio activo no puede ejercer, mientras dure en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial.

Tampoco puede ejercer el comercio, la industria o la actividad profesional o política alguna, ni afiliarse a partido o movimiento político, ni desempeñar cargo en los organismos oficiales o probados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.

Artículo 12.- Son derechos y obligaciones del Oficial y Suboficial retirado:

- 1.** Mantener su estado policial, usar el grado con la mención de su situación de retiro, usar el uniforme en fiestas patrias, ceremonias oficiales e institucionales, y recibir los honores fúnebres que correspondan a su grado.
- 2.** Recibir el tratamiento correspondiente a su grado en sus relaciones con el personal policial.
- 3.** Percibir el haber de retiro.
- 4.** Recibir asistencia médica integral gratuita para sí y sus familiares con derecho a pensión conforme a la reglamentación respectiva.
- 5.** Acudir al llamado por convocatoria y movilización.

Artículo 13.- El Estado Policial se pierde por las siguientes causas:

- 1.** Por pérdida de la nacionalidad o ciudadanía.
- 2.** Por condena de inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por sentencia firme y ejecutoriada.
- 3.** Por sanción disciplinaria de baja.

Artículo 14.- La pérdida del Estado Policial no implica la privación de los derechos adquiridos para los haberes de retiro, los derechos del retirado, ni la pensión que pueda corresponder a sus herederos, salvo que la causal sea la prevista en el numeral 1 del artículo anterior o que la condena firme y ejecutoriada se refiera a los delitos de genocidio, tortura, peculado, violación, desaparición forzosa de personas y homicidio por razones políticas.

CAPITULO II

DE LA CARRERA POLICIAL

Artículo 15.- La Carrera Policial es la profesión técnica y científica que desarrollan ciudadanos juramentados para servir a la sociedad conforme a la Constitución Nacional y las Leyes. Se inicia en los institutos de Formación Policial.

Artículo 16.- En la Carrera Policial se reconocen:

- a)** Cuadro Permanente de Oficiales; y,
- b)** Cuadro Permanente de Suboficiales.

Artículo 17.- Integran el Cuadro Permanente de la Policía Nacional los Oficiales y Suboficiales en actividad.

Artículo 18.- En el Cuadro de Oficiales y Suboficiales, se establecen las siguientes especialidades:

- a)** De Orden y Seguridad;
- b)** De Intendencia; y,
- c)** De Sanidad.

La Policía Nacional capacitará a su personal en otras especialidades que serán reglamentadas.

CAPITULO III

DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LA POLICIA NACIONAL

Artículo 19.- Las condiciones para el ingreso al Cuadro Permanente de Oficiales son:

- a) Ser de nacionalidad paraguaya; y,
- b) Ser egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza o ser egresado universitario.

Artículo 20.- Los egresados de Instituciones Policiales de Enseñanza y egresados universitarios que ingresen a la Policía Nacional, están obligados a servir en la institución durante 5 (cinco) años como mínimo.

Artículo 21.- El Oficial que haya sido enviado en misión de estudio al exterior o becado en instituciones nacionales, está obligado a servir el doble del tiempo de duración de la misión o beca.

Artículo 22.- Las misiones al exterior serán autorizadas por Decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 23.- Podrán ser incorporados a la Policía Nacional, previo Decreto del Poder Ejecutivo, ciudadanos extranjeros cuyas labores de asesoramiento o instrucción sean necesarias, atendiendo a las cualidades técnicas, intelectuales y morales de los mismos.

Artículo 24.- Se consideran que han cumplido con el Servicio Militar Obligatorio y sus legajos serán remitidos a la Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización para su registro pertinente, los alumnos de los institutos de Formación Policial que hayan permanecido por lo menos 1 (un) año en los mismos.

Artículo 25.- Las condiciones para el ingreso al Cuadro Permanente de Suboficiales son:

- a) Ser de nacionalidad paraguaya; y,
- b) Ser egresado de instituciones Policiales de Enseñanza. El Suboficial egresado está obligado a servir en la Institución por lo menos 3 (tres) años. La misma disposición rige para los egresados de la Escuela de Aprendices de la Banda de Músicos.

Artículo 26.- El Suboficial que haya sido enviado al exterior en misión de estudio, está obligado a servir en la institución el doble del tiempo de duración de la misión o beca.

Artículo 27.- El Suboficial que haya sido becado en Instituciones nacionales de formación técnica, está obligado a servir por un tiempo equivalente al doble de dicha beca.

Artículo 28.- Los Oficiales y Suboficiales que no cumplieren con las obligaciones establecidas en este capítulo, reembolsarán al Estado los gastos ocasionados en su formación y estudio.

CAPITULO IV

DE LOS EFECTIVOS

Artículo 29.- EL Comandante de la Policía Nacional propondrá al Poder Ejecutivo en el Proyecto Anual de Presupuesto de la Policía Nacional, el número de efectivos, atendiendo las necesidades para el cumplimiento de su misión.

CAPITULO V

DE LA REINCORPORACION

Artículo 30.- Podrán reincorporarse los Oficiales y Suboficiales en situación de retiro, conforme a las necesidades de servicio previo dictamen del Tribunal de Calificaciones.

Artículo 31.- Los Oficiales subalternos y Suboficiales del Cuadro Permanente que se reincorporen antes de 1 (un) año, no perderán su antigüedad.

TITULO III

DE LA CATEGORIA, JERARQUIA, GRADOS Y ANTIGÜEDAD

DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL

CAPITULO I

DE LA CATEGORIA

Artículo 32.- El personal policial se clasifica en las siguientes categorías:

1. Oficiales.
2. Cadetes.
3. Suboficiales.
4. Conscriptos.
5. Personal Civil.

CAPITULO II

DE LA JERARQUIA

Artículo 33.- La clasificación jerárquica de Oficiales comprende:

1. Oficiales Comisarios Generales.
2. Oficiales Superiores.
3. Oficiales Subalternos.

Artículo 34.- Los comisarios Generales de la Policía Nacional conforman el Cuadro de Oficiales Comisarios Generales de la Institución.

CAPITULO III

DEL GRADO

Artículo 35.- Los grados de Oficiales de la Policía Nacional comprenden:

a) Oficiales Comisarios

1. Comisario General Comandante
2. Comisario General Director
3. Comisario General Inspector

b) Oficiales Superiores

1. Comisario Principal
2. Comisario
3. Subcomisario

c) Oficiales Subalternos

1. Oficial Inspector
2. Oficial Primero
3. Oficial Segundo
4. Oficial Ayudante

Artículo 36.- Los Cadetes de instituciones Policiales de Enseñanza tienen precedencia a los Suboficiales y sus grados son:

1. Brigadier Mayor.
2. Brigadier.
3. Subbrigadier.
4. Cadete.

Artículo 37.- Los grados de Suboficiales de la Policía Nacional comprenden:

1. Suboficial Superior.
2. Suboficial Principal.
3. Suboficial Mayor.
4. Suboficial Inspector.
5. Suboficial Primero.
6. Suboficial Segundo
7. Suboficial Ayudante.

Artículo 38.- Los grados del personal Conscripto comprenden:

1. Cabo Primero.
2. Cabo Segundo.
3. Cabo Agente.

CAPITULO IV

DE LA ANTIGÜEDAD

Artículo 39.- La antigüedad es el orden de precedencia en las categorías respectivas. A igualdad de grado, la antigüedad se determina por la fecha de ascenso y a igualdad de fecha de ascenso, por el orden de precedencia establecido en el Decreto de egreso de las instituciones Policiales de Enseñanza. La antigüedad de los egresados universitarios se considerará desde su ingreso a la Institución Policial.

Artículo 40.- La antigüedad entre alumnos egresados de los Institutos de Formación se establecerá por la calificación obtenida en exámenes ; en caso de igualdad, será más antiguo el que obtenga mejor calificación en aptitudes policiales.

Artículo 41.- Los alumnos de los institutos de Formación, egresados en el extranjero, serán incorporados a su promoción de origen y su antigüedad será conforme al promedio general de sus calificaciones; en caso de igualdad de promedio, se procederá de acuerdo al artículo precedente.

Artículo 42.- Los Oficiales extranjeros acreditados en misión de instrucción en la Policía Nacional, serán más antiguos que los Oficiales nacionales de igual grado.

Artículo 43.- A los efectos del servicio, a igualdad de grado entre Oficiales en actividad y retirados, será más antiguos los primeros; igual tratamiento se aplicará en el cuadro de suboficiales.

TITULO IV

DEL PERSONAL NO COMPRENDIDO EN LOS GRADOS POLICIALES

CAPITULO I

DEL PERSONAL CIVIL DE LA POLICIA NACIONAL

Artículo 44.- El personal civil será incorporado a la Institución como profesional técnico o administrativo, y estará sujeto al régimen legal disciplinario de la Policía Nacional, y en lo pertinente, a las disposiciones establecidas en esta Ley.

Artículo 45.- La Policía Nacional podrá contratar temporalmente el personal idóneo para cumplir funciones en una determinada especialidad.

Artículo 46.- Son condiciones para el ingreso del personal civil:

1. Ser de nacionalidad paraguaya.
2. Tener buena conducta y honorabilidad.
3. Idoneidad en la especialidad a ser incorporado.

CAPITULO II

DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 47.- La incorporación, derechos y obligaciones del personal docente se regirán por esta Ley y el reglamento del Instituto pertinente.

TITULO V

DE LA REVISTA

CAPITULO UNICO

DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo 48.- El Oficial o Suboficial revista en:

1. Actividad.
2. Inactividad.
3. Disponibilidad.
4. Retiro.

Artículo 49.- Revistan en Actividad:

1. El Oficial o Suboficial que presta servicio efectivo en dependencias de la Policía Nacional.
2. El Oficial o Suboficial alejado de la función policial hasta 1 (un) año, por enfermedad, lesión o accidente, sufrido en actos de servicio o a consecuencia de los mismos.
3. Los alumnos de los Institutos de Formación y los Conscriptos.

Artículo 50.- Revistan en inactividad:

1. El Oficial o Suboficial alejado de la función policial por más de seis meses por enfermedad, lesión o accidente, sufrido fuera del servicio.
2. El Oficial o Suboficial alejado de la función policial por 1 (un) año a consecuencia de enfermedad, lesión o accidente, sufrido en actos de servicio.
3. El Tribunal de Calificaciones considerará la situación del Oficial o Suboficial que al año de inactividad no pueda volver a la actividad según el dictamen de la Junta de Reconocimiento Médico Policial.

Artículo 51.- Revistan en disponibilidad:

1. El Oficial o Suboficial sometido a proceso y sobre quien pesare orden de detención, prisión preventiva o condena; podrá guardar reclusión por

razones de seguridad en dependencias de la Policía Nacional a criterio y disposición del juzgado.

2. Si la resolución recaída en la causa le fuere favorable, el Oficial o Suboficial revistará nuevamente en actividad, y recuperará su grado y antigüedad.

Artículo 52.- Revistan en retiro:

1. El Oficial o Suboficial, que sin perder su Estado Policial y grado, se exonera de la obligación de prestar servicio efectivo, salvo en los casos de convocatoria o movilización.

2. El Retiro puede ser Temporal o Absoluto y se conferirá cuando se hallen reunidos los requisitos exigidos en esta Ley.

3. El Oficial o Suboficial en Retiro recibirá el mismo tratamiento establecido en el numeral 1 del Artículo 51.

Artículo 53.- Tiene derecho a Retiro Temporal:

1. El Oficial o Suboficial que hallándose en las condiciones previstas en esta Ley, se retire antes de cumplir la edad límite establecida para cada grado.

2. El que haya obtenido el Retiro por encontrarse en las condiciones previstas en el Artículo 50.

3. El que haya solicitado voluntariamente su retiro.

Artículo 54.- Tiene derecho a Retiro Absoluto:

1. El Oficial o Suboficial que haya quedado inválido por accidente, enfermedad o lesión en las condiciones establecidas en esta Ley.

2. El que llega a la edad límite que corresponde a su grado.

Artículo 55.- Se podrá disponer de oficio el Retiro Absoluto cuando se haya cumplido:

1. Oficiales:

- Comisario General Comandante 60 años

- Comisario General Director 57 años

- Comisario General Inspector 54 años

- Comisario Principal 51 años

- Comisario 48 años

- Subcomisario 44 años
- Oficial Inspector 40 años
- Oficial Primero 36 años
- Oficial Segundo 32 años
- Oficial Ayudante 28 años

2. Suboficiales:

- Suboficial Superior 60 años
- Suboficial Principal 57 años
- Suboficial Mayor 55 años
- Suboficial Inspector 50 años
- Suboficial Primero 45 años
- Suboficial Segundo 40 años
- Suboficial Ayudante 34 años

Artículo 56.- El retiro produce los siguientes efectos:

1. Hace cesar la obligación de prestar servicio efectivo.
2. Otorga el derecho a percibir el haber jubilatorio.

Artículo 57.- Los Oficiales y Suboficiales en retiro pasan a integrar el Cuadro de la Reserva con los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley.

Artículo 58.- Todo ascenso, inactividad, disponibilidad, retiro o baja se producirá por Decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del Comandante de la Policía Nacional.

TITULO VI

DE LOS SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL POLICIAL

CAPITULO I

DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo 59.- Los Oficiales, Suboficiales, Personal Civil y Alumnos de los Institutos de Formación de la Policía Nacional tienen derecho a una asignación de sueldo.

Artículo 60.- Los sueldos y las otras remuneraciones serán fijados en el Presupuesto General de la Nación.

Artículo 61.- El Comisario General retirado no perderá los privilegios y beneficios.

CAPITULO II

DE LAS RACIONES, EQUIPOS Y VESTUARIOS

Artículo 62.- Los Oficiales, Cadetes, Suboficiales y Conscriptos tienen derecho a vestuarios, prendas, equipos y menajes; su provisión y distribución serán reglamentadas.

En horas de servicio tienen derecho a alimentos.

CAPITULO III

DE LOS VIATICOS

Artículo 63.- El personal policial comisionado o becado tiene derecho a viático, atendiendo la naturaleza, distancia y tiempo de duración de la comisión en los siguientes casos:

- Misión de servicio dentro o fuera del país; y,
- Misión de estudio dentro o fuera del país.

CAPITULO IV

DE LOS PASAJES

Artículo 64.- El Oficial, suboficial y personal Civil de la Policía Nacional tienen derecho a pasaje:

1. Para sí y su familia en los siguientes casos:

1. Evacuación por enfermedad, lesión o accidente.
2. Traslado a nuevo destino.

2. Para sí en los siguientes casos:

1. Presentación a la dependencia de destino.

2. Comisión de servicio.

3. Misión de estudio.

Artículo 65.- Los Cadetes tienen derecho a pasaje en los siguientes casos:

1. Misión de estudio.

2. Vacación anual hasta el lugar de residencia de su familia dentro del territorio nacional.

3. Permiso por circunstancias especiales.

Artículo 66.- El Personal Conscripto tiene derecho a pasaje en los siguientes casos:

1. Los previstos en los numerales 1.1, 2.1 y 2 del Artículo 64.

2. Por licenciamiento, 1.1 2.1 y 2 del Artículo 64.

Artículo 67.- Se les facilitarán los medios necesarios al Oficial, Suboficial y Personal Civil de la Policía Nacional que se encuentren en los casos contemplados en el Artículo 64.

CAPITULO V

DE LAS LICENCIAS

Artículo 68.- El Personal Policial tendrá derecho a licencias con goce de sueldo por un plazo de hasta diez días, en los siguientes casos:

1. Para contraer matrimonio.

2. Por fallecimiento del cónyuge, descendientes o ascendientes.

Artículo 69.- Las licencias establecidas en esta Ley serán reglamentadas.

CAPITULO VI

DE LOS HABERES DE RETIRO

Artículo 70.- El Oficial o Suboficial gozará del haber de retiro mensual establecido en proporción al tiempo de servicio prestado.

Artículo 71.- Los servicios prestados a la Nación con anterioridad al ingreso como Oficial o Suboficial en cargos con derechos a jubilación serán computados a los efectos de los haberes de retiro.

Artículo 72.- El Oficial o Suboficial que hubiese cumplido 30 (treinta) años de servicio, deberá acogerse a los beneficios del retiro con el haber íntegro que corresponde al grado.

Artículo 73.- La fracción del tiempo que en el término total de servicio o antigüedad exceda de seis meses será computada por 1 (un) año.

Artículo 74.- Los haberes de retiro son permanentes e inalienables; podrán ser embargados conforme a la legislación vigente.

Artículo 75.- El haber de retiro será proporcional al tiempo de servicio prestado de acuerdo con la siguiente escala:

10 años 30%

11 años 35%

12 años 40%

13 años 45%

14 años 50%

15 años 55 %

16 años 60%

17 años 65%

18 años 70%

19 años 74%

20 años 78%

21 años 82%

22 años 85%

23 años 88%

24 años 91%

25 años 94%

26 años 96%

27 años 98%

30 años 100%

Artículo 76.- La liquidación y el pago del haber de retiro se harán en efectivos desde la fecha del Decreto que da por terminado el servicio y estarán sujetos a las previsiones del Presupuesto General de la Nación, equiparándose a los sueldos de los del servicio activo.

Artículo 77.- El derecho a solicitar el haber de retiro es imprescriptible.

Artículo 78.- La Dirección General de Bienestar Policial tendrá a su cargo las gestiones referentes a los haberes de retiro del Oficial o Suboficial y la pensión de los herederos.

Artículo 79.- El haber de retiro del Oficial o Suboficial en actividad, incapacitado en actos de servicio, siempre que por aplicación del Artículo 75 no le corresponde una asignación mayor, se computará de acuerdo a la siguiente escala:

1. Por incapacidad absoluta y permanente, percibirá el ciento por ciento.
2. Por mutilación de un brazo o una pierna, de una mano o un pié, percibirá el noventa y cinco por ciento.
3. Por pérdida parcial del ojo o del oído, percibirá el noventa por ciento.
4. Por otras lesiones orgánicas o funcionales que incapacitan permanentemente para el desempeño del servicio, percibirá el ochenta por ciento.
5. Por otras lesiones físicas o enfermedades contraídas en actos de servicio o a consecuencia del mismo que disminuya la capacidad para el desempeño de sus funciones, percibirá el cincuenta por ciento de sus haberes.

Artículo 80.- El porcentaje de incapacidad que resultare del dictamen de la Junta de Reconocimiento Médico Policial, se computará al porcentaje que corresponde por el tiempo de servicio a fin de establecer el monto del haber de retiro que no podrá exceder del ciento por ciento.

Artículo 81.- Para la aplicación del Artículo 79 numeral 1, se entenderá por incapacidad absoluta y permanente cuando el Oficial Suboficial se halla afectado en su integridad orgánica o funcional para el desempeño del servicio.

Artículo 82.- A los efectos de la aplicación del Artículo 81 se considerarán pérdida de un miembro u órgano la disminución del sesenta por ciento en su capacidad.

Artículo 83.- Al personal de la Policía Nacional fallecido en acto de servicio o a consecuencia de lesiones sufridas en dicho acto y al que se hallare comprendido en las prescripciones del Artículo 81, previo dictamen del Tribunal de Calificaciones de Servicio, se le conferirá el ascenso al grado inmediato superior con los beneficios correspondientes, cualquiera fuere el tiempo de servicio.

Artículo 84. A los alumnos de los Institutos de Formación y Conscriptos que como consecuencia de actos de servicio resultaren disminuidos en su capacidad en forma absoluta y permanente, se les conferirá los grados de Oficial Ayudante y Suboficial Ayudante respectivamente. Después de tres meses, pasarán a retiro con el haber correspondiente al sueldo íntegro de sus respectivos grados.

Artículo 85.- El personal policial mutilado o lisiado en actos de servicio percibirá una bonificación mensual de veinte y cinco por ciento sobre su salario.

Artículo 86.- El Oficial o suboficial con haber de retiro por incapacidad será inspeccionado anualmente por la Junta de Reconocimiento Médico Policial para determinar el estado de su condición física o mental de modo a adecuar el monto de sus haberes al grado de incapacidad.

Artículo 87.- Los Comisarios Generales, Comandante y Subcomandante, tendrán como haber de retiro el ciento por ciento del sueldo correspondiente al grado.

Artículo 88.- El personal civil de la Policía Nacional con derecho a jubilación gozará de los mismos beneficios establecidos en este Título y Capítulo.

CAPITULO VII

DE LAS PENSIONES

Artículo 89.- Los herederos de Oficiales y Suboficiales tendrán derecho a percibir una pensión de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 90.- Las pensiones son permanentes e inalienables y se otorgarán por Decreto del Poder Ejecutivo. Podrán ser embargadas conforme a la legislación vigente.

Artículo 91.- La pensión a concederse en virtud de esta Ley, estará sujeta a las variaciones del sueldo previstas en el Presupuesto General de la Nación y se liquidará desde la fecha de fallecimiento del causante, de acuerdo con la siguiente escala:

1. A los herederos de Oficiales y Suboficiales muertos en actos de servicios, el total del sueldo que corresponda al grado inmediato superior.
2. A los herederos de Oficiales y Suboficiales muertos en situación de actividad, retiro, inactividad o disponibilidad, el setenta y cinco por ciento del sueldo que corresponda al causante.

Modificado por Ley 632/95 - Ver Referencia

Artículo 92.- A los efectos de esta Ley, son herederos de Oficiales y Suboficiales con observancia de la regla de que el pariente más cercano excluye al más remoto:

1. Los hijos menores de edad y las mayores incapaces con el cónyuge supérstite o la persona que hubiere convivido con el causante en matrimonio aparente durante más de 3 años antes del fallecimiento.
2. Los padres del causante con el cónyuge supérstite o la persona que hubiere convivido con el causante en matrimonio aparente durante más de 3 años antes del fallecimiento.
3. Los hermanos menores de edad y los mayores incapaces en situación de dependencia económica con el cónyuge supérstite o la persona que hubiere convivido con el causante en matrimonio aparente durante más de 3 años antes del fallecimiento.

4. El cónyuge supérstite o la persona que hubiere convivido con el causante en matrimonio aparente durante más de 3 años antes del fallecimiento.

Artículo 93.- La distribución de la pensión se hará con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 94.- Los padres con derecho a pensión podrán acumular aquellas que le correspondan por fallecimiento de dos o más hijos.

Artículo 95.- La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento dará a los beneficiarios derechos a pensión.

Artículo 96.- El derecho a pensión transmitido por sucesión hereditaria, se extingue:

1. Por fallecimiento de los beneficiarios.
2. Por haber, los hijos o hermanos, cumplido la mayoría de edad, salvo caso de incapacidad.
3. Por presentación o por tenerse noticias ciertas del presunto fallecido.

Artículo 97.- El derecho a pensión por sucesión hereditaria deberá justificarse mediante sentencia declaratoria de herederos.

Artículo 98.- En enero de cada año el pensionado justificará ante la oficina pagadora su derecho a seguir percibiendo la pensión.

Artículo 99.- A los Alumnos de los Institutos de Formación y los Conscriptos que fallecieren a consecuencia de accidentes, enfermedades o lesiones, sufridos en actos de servicio, se les conferirán los grados previstos en el Artículo 84 y la pensión para sus herederos, correspondientes al sueldo íntegro de su grado póstumo.

Artículo 100.- En caso de fallecimiento del Oficial o Suboficial en servicio activo, Cadete o Conscripto, la institución sufragará los gastos funerarios y el traslado de sus restos mortales al sitio señalado por sus familiares.

Artículo 101.- Los herederos del personal civil, con derecho a jubilación y fallecido en acto de servicio, tendrán derecho a pensión de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo.

TITULO VII
DE LOS ASCENSOS

CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 102.- Los grados y ascensos de Oficiales y Suboficiales serán conferidos por Decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del Comandante de la Policía Nacional.

Artículo 103.- Los ascensos serán conferidos a fin de cada año y por razones especiales, en forma extraordinaria.

Artículo 104.- No podrán ascender los Oficiales y Suboficiales en situación de disponibilidad.

Artículo 105.- El Oficial o Suboficial postergado por el Tribunal de Calificaciones de Servicio en su ascenso dos veces consecutivas, pasará a retiro.

Artículo 106.- El personal de la Policía Nacional que cumpliera el tiempo necesario en el grado para el ascenso y reuniera los requisitos para el mismo y que por la falta de vacancia en el grado superior no fuere ascendido, deberá percibir los haberes correspondientes al grado inmediato superior conforme lo disponga el Tribunal de Calificaciones de Servicio.

CAPITULO II
DE LOS ASCENSOS DE OFICIALES

Artículo 107.- Para ser promovido a Oficial Ayudante de la Policía Nacional, se requiere haber egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza o ser egresado universitario.

Artículo 108.- Para ser promovido a Oficial Segundo de la Policía Nacional, se requiere haber cumplido 2 (dos) años en el grado anterior y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 109.- Para ser promovido a Oficial Primero, se requiere haber cumplido 3 (tres) años en el grado anterior y egresar de la Escuela de Especialización de Oficiales.

Artículo 110.- Para ser promovido a Oficial Inspector, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 111.- Para ser promovido a Subcomisario, se requiere haber cumplido 5 (cinco) años en el grado anterior y egresar de la Escuela de Aplicación de Oficiales.

Artículo 112.- Para ser promovido a Comisario, se requiere haber cumplido 5 (cinco) años en el grado anterior y egresar de la Escuela de Jefes y Asesoramiento Policial.

Artículo 113.- Para ser promovido a Comisario Principal, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, ser egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza o ser egresado universitario y de la Escuela de Jefes y Asesoramiento Policial, ejercer el cargo correspondiente al grado y contar con el acuerdo del Senado.

Artículo 114.- Para ser promovido a Comisario General Inspector, se requiere haber cumplido 3 (tres) años en el grado anterior, ser egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza o ser egresado universitario y del Colegio Superior de Policía, ejercer el cargo correspondiente al grado y contar con el acuerdo del Senado.

Artículo 115.- Para ser promovido a Comisario General Director, se requiere ostentar el grado de Comisario General Inspector, ser de la especialidad "Orden y Seguridad", egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza y del Colegio Superior de Policía, ejercer el cargo correspondiente al grado y contar con el acuerdo del Senado.

Artículo 116.- Para ser promovido a Comisario General Comandante, se requiere ostentar el grado de Comisario General Director, ser nombrado

por el Presidente de la República Comandante de la Policía Nacional. Podrá permanecer en el mando por un tiempo no mayor de 5 (cinco) años y contar con el acuerdo del Senado.

Artículo 117.- Los Oficiales que pertenecen al Cuadro de Oficiales Comisarios Generales, con el grado de Comisario General Inspector y Comisario General Director, podrán permanecer en el grado por un plazo no mayor de 3 (tres) años.

CAPITULO III

DE LOS ASCENSOS DE SUBOFICIALES

Artículo 118.- Para ser promovido a Suboficial Ayudante, se requiere haber egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza.

Artículo 119.- Para ser promovido a Suboficial Segundo, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 120.- Para ser promovido a Suboficial Primero, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 121.- Para ser promovido a Suboficial Inspector, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, ser egresado de la Escuela de Aplicación de Suboficiales y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 122.- Para ser promovido a Suboficial Mayor, se requiere haber cumplido 5 (cinco) años en el grado anterior, ser egresado de la Escuela de Aplicación y aprobar los exámenes de aptitud.

Artículo 123.- Para ser promovido a Suboficial Principal, se requiere haber cumplido 5 (cinco) años en el grado anterior, ser de la especialidad de "Orden y Seguridad", egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza y de la Escuela de Aplicación de Suboficiales, y demostrar méritos y aptitudes profesionales.

Artículo 124.- Para ser promovido a Suboficial Superior, se exigen los mismos requisitos del artículo anterior y podrá permanecer en el grado 3 (tres) años.

CAPITULO IV

DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACION

Artículo 125.- Son considerados alumnos de los Institutos de Formación, los Cadetes, los Aspirantes a Suboficiales y los Aprendices Músicos de los Institutos Policiales de Enseñanza.

Artículo 126.- Los alumnos de los Institutos de Formación serán nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V

DE LOS CONSCRIPTOS

Artículo 127.- La incorporación y el licenciamiento de Conscriptos se regirán por la Ley del Servicio Militar Obligatorio.

TITULO VIII

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I

DE LAS NORMAS GENERALES

Artículo 128.- El mando es el ejercicio de la autoridad que la Ley y los reglamentos otorgan al personal de la Policía Nacional sobre sus subordinados, por razón de destino, comisión, grado jerárquico o antigüedad.

Artículo 129.- La disciplina consiste en el acatamiento, respeto y obediencia a las órdenes del superior, impartida conforme a la Constitución, la Ley y los reglamentos.

Artículo 130.- La subordinación será mantenida rigurosamente. La decisión tomada por el superior es de su entera responsabilidad y debe ser cumplida sin réplica, siempre que la misma se ajuste a la Constitución Nacional y las Leyes. De considerar ilegal la orden, el subalterno solicitará del superior se le exonere del cumplimiento y en caso de reiteración de la orden aquél podrá solicitar la autorización pertinente para acudir a las autoridades superiores. Siempre le asiste al subordinado la eximición del deber de obediencia cuando la orden del superior es manifiestamente inconstitucional o ilegal.

Artículo 131.- El subalterno es responsable del cumplimiento de las órdenes que recibe y está obligado a dar cuenta del resultado al superior que la haya impartido.

Artículo 132.- El conducto ordinario para la emisión y el cumplimiento de toda orden de servicio es jerárquico.

CAPITULO II

DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES

Artículo 133.- Configuran faltas las infracciones a las obligaciones previstas en esta Ley y en los reglamentos institucionales.

Artículo 134.- Las sanciones disciplinarias que se establecen son:

- Apercibimiento;
- Arresto; y,
- Baja.

Artículo 135.- Las faltas se clasifican en leves y graves. La calificación de las mismas y la aplicación de las sanciones serán conformes al reglamento.

Artículo 136.- No podrá aplicarse más de una sanción por un mismo hecho. Si se cometieren faltas leves y graves en la misma ocasión, se aplicará la sanción que corresponda a la grave; en caso de duda, se aplicará la más benigna.

Artículo 137.- Si el personal que cometiere la falta perteneciere a otra dependencia, el interviniente adoptará las medidas y remitirá los antecedentes del hecho al superior directo del infractor.

Artículo 138.- Cuando una falta ha sido cometida en presencia de varios superiores, el más antiguo de éstos será quien tome las medidas pertinentes.

Artículo 139.- La sanción de baja será aplicada por el Poder Ejecutivo a solicitud del Comandante de la Policía Nacional, previo sumario administrativo y con dictamen del Tribunal de Calificaciones de Servicio.

Artículo 140.- El personal policial permanecerá arrestado en dependencia a cargo de un jefe de mayor graduación.

Artículo 141.- El Oficial o Suboficial sancionado con el arresto, deberá cumplirlo en dependencia de la Policía Nacional, en libre comunicación con sus familiares.

TITULO IX

DE LOS UNIFORMES Y DISTINTIVOS

CAPITULO UNICO

Artículo 142.- Los uniformes, distintivos, insignias del grado y demás emblemas son privativos de la institución y del personal de la Policía Nacional. Constituyen símbolos de autoridad. Se prohíbe su fabricación, venta y uso, a personas ajenas a la misma, como los que ofrezcan semejanza con los usados por la Policía Nacional o que puedan inducir a confusión con ellos.

Artículo 143.- Ningún organismo público ni privado, departamental, municipal o persona alguna, podrá utilizar la denominación de Policía de Seguridad, ni los grados jerárquicos que correspondan al personal de la Policía Nacional.

Artículo 144.- El uso del uniforme, distintivo, breve y condecoraciones será regido por la reglamentación correspondiente.

TITULO X

DEL USO DE LAS ARMAS

CAPITULO UNICO

Artículo 145.- El personal de la Policía Nacional podrá emplear sus armas cuando fuere motivado por la exigencia del servicio, luego de realizadas las persuasiones y prevenciones reglamentarias.

Artículo 146.- El uso indebido de las armas dará lugar al proceso administrativo pertinente.

Artículo 147.- El personal de la Policía Nacional que en actos de servicios o con ocasión de él, hiciere uso de sus armas en forma reglamentaria, estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa, sin perjuicio de la investigación correspondiente.

Artículo 148.- El personal de la Policía Nacional, que se encontrare sujeto a investigación administrativa o judicial por razón del uso de sus armas en actos de servicio o con ocasión de él, no será pasible de medidas preventivas, administrativas ni judiciales, mientras no se expida sentencia condenatoria. Salvo que en los primeros procedimientos realizados resultare evidente que el uso del arma fue abusivo, indebido e innecesario o que del diagnóstico practicado por un médico psiquiatra designado por el juez interviniente resultare que el procesado sufre de serias alteraciones mentales que lo vuelven peligroso para la sociedad.

TITULO XI

DE LA ORGANIZACION DE LA POLICIA NACIONAL

Artículo 149.- La Policía Nacional como integrante de la fuerza pública de la Nación, para el cumplimiento de sus fines establecidos en el Artículo 175 de la Constitución Nacional, se organizan en:

- Comando;
- Direcciones Generales; y,

- Direcciones.

CAPITULO I

DEL COMANDO

Artículo 150.- El Comando es el organismo máximo de las Fuerzas Policiales, responsable de la dirección, planeamiento, coordinación, control y empleo de los recursos asignados a ella; se ejerce a través del Comandante y el Subcomandante de la Policía Nacional.

Artículo 151.- El Comandante de la Policía Nacional es nombrado por el Poder Ejecutivo y lo ejerce con el grado de Comisario General Comandante. Es la autoridad máxima de la institución con jurisdicción y competencia en todo el territorio de la Nación y será conferido con carácter exclusivo a quien ejerza el cargo de Comandante de la Policía Nacional.

Artículo 152.- Son requisitos para ser Comandante de la Policía Nacional:

- a)** Ser de nacionalidad paraguaya;
- b)** Egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza en la especialidad de Orden y Seguridad;
- c)** Ser Oficial Superior del Cuadro Permanente en actividad; y,
- d)** Ser Diplomado del Colegio Superior de Policía.

Artículo 153.- Son atribuciones del Comandante de la Policía Nacional:

- 1.** Representar y administrar la institución.
- 2.** Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que se relacionen con la función policial.
- 3.** Crear o suprimir dependencias de conformidad a las necesidades del servicio y establecer sus funciones.
- 4.** Expedir permiso de portación o tenencia de armas de uso civil, conforme a las disposiciones legales.
- 5.** Dictar Edictos, Reglamentos y Resoluciones.

6. Proponer los nombramientos y ascensos del personal de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales.
7. Conferir los grados y ascensos del personal conscripto.
8. Elevar anualmente el proyecto del presupuesto y la memoria de la institución.
9. Otorgar licencias, condecoraciones, distinciones y aplicar las sanciones disciplinarias.
10. Autorizar el llamado a licitaciones para adquisiciones de elementos conforme a las Leyes que rigen la materia.
11. Proponer grados "Honoris Causa" de conformidad al reglamento.
12. Fomentar relaciones internacionales con organismos similares para el intercambio de conocimientos profesionales.
13. Ejercer otras funciones que no están enunciadas expresamente en este Capítulo y que surjan de los fines, funciones y obligaciones atribuidas por esta Ley.

Artículo 154.- Integran la Comandancia de la Policía Nacional:

- El Consejo de Comisarios Generales;
- Los Tribunales de Calificaciones de Servicio; y,
- El Gabinete del Comandante.

Artículo 155.- El Consejo de Comisarios Generales es un organismo no permanente convocado y presidido por el Comandante e integrado por Comisarios Generales en Actividad. Su función es asesorar al mismo en cuestiones de trascendencia institucional. Su organización y funcionamiento se regirán por el reglamento.

Artículo 156.- Los Tribunales de Calificaciones de Servicio son organismos competentes para expedirse sobre los méritos, aptitudes, distinciones, citaciones, ascensos, retiros, baja y reincorporaciones. Sus resoluciones son irrecurribles.

Los componen:

1. Los Tribunales de Calificaciones de Servicio para Oficiales son:

a) El Tribunal Superior: que tiene a su cargo entender en cuestiones de su competencia referidas a Oficiales desde el grado de Comisario. Es

presidido por el Comandante de la Policía Nacional y lo componen todos los Comisarios Generales en actividad; y,

b) El Tribunal Ordinario: que tiene a su cargo entender en cuestiones de su competencia referidas a Oficiales hasta el grado de Sub Comisario. Es presidido por el Comandante de la Policía Nacional y lo componen todos los Comisarios Generales en actividad y otros convocados por el Tribunal.

2. El Tribunal de Calificaciones de Servicio para Sub Oficiales tiene a su cargo entender las cuestiones de su competencia referida a Sub Oficiales. Es presidido por el Sub Comandante de la Policía Nacional o su representante, quien convocará para integrarlo como miembros, a los jefes de dependencias que considere pertinentes.

Artículo 157.- La competencia, organización y funcionamiento de los Tribunales se regirán por sus reglamentos respectivos.

Artículo 158.- El Gabinete del Comandante lo conforman:

- Ayudantía General;
- Secretaría Privada;
- Relaciones Públicas; y,
- Asesores.

Artículo 159.- La Jefatura del Gabinete del Comandante es ejercida por el Ayudante General quien refrenda las resoluciones, edictos, órdenes y otras disposiciones. Su organización y funcionamiento se regirán por reglamento.

Artículo 160.- El Sub Comandante de la Policía Nacional es nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del Comandante a quien reemplaza en caso de ausencia o impedimento, con las mismas atribuciones. Supervisará las actividades institucionales y ejercerá otras funciones que le fueren conferidas por el Comandante. El cargo será ejercido por un Comisario General Director que reúna los mismos requisitos enunciados en el Artículo 151.

Artículo 161.- Integran la Sub Comandancia de la Policía Nacional:

1. El Consejo Asesor Superior.

2. El Gabinete del Sub Comandante.
3. La Dirección de Justicia Policial.
4. La Comisión Permanente de Estudios de Leyes y Reglamentos.

Artículo 162.- El Consejo Asesor Superior es un organismo de carácter permanente, profesional y técnico, de alta especialización en materias policiales, administrativas y jurídicas. Orienta y coordina las actividades institucionales para la adecuada toma de decisiones del Comandante de la Policía Nacional, y vela por la unidad de doctrina y de acción.

La Jefatura del Consejo Asesor Superior será ejercida por el Sub Comandante y la componen:

- El Departamento de Personal (D-1);
- El Departamento de Inteligencia (D-2);
- El Departamento de Planificación y Operaciones (D-3);
- El Departamento de Logística (D-4); y,
- El Departamento Jurídico (D-5).

Artículo 163.- El Gabinete del Sub Comandante lo conforman:

- La Ayudantía;
- La Secretaría; y,
- Los Asesores.

La organización y el funcionamiento de los Departamentos que integran el Consejo Asesor Superior y los organismos del Gabinete del Sub Comandante se regirán por sus reglamentos respectivos.

Artículo 164.- La Dirección de Justicia Policial es el organismo que tiene por misión administrar justicia en los delitos y faltas policiales, de conformidad a Leyes y reglamentos que lo rigen. Los integran: Tribunales, Juzgados, Fiscalías y Juzgados de Asuntos Internos Administrativos.

La Dirección de Justicia Policial será ejercida por un Comisario General Inspector de Orden y Seguridad.

Artículo 165.- La Comisión Permanente de Estudios de Leyes y Reglamentos es el organismo que se encarga de la revisión,

actualización de Leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento institucional. Del estudio de Leyes, decretos, ordenanzas y otras disposiciones legales que relacionan con la función policial. Redacta y elabora proyectos de Leyes y reglamentos. Su organización y funcionamiento se regirán por reglamento. La Jefatura de la Comisión Permanente de Estudios de Leyes y Reglamentos será ejercida por un Comisario Principal de Orden y Seguridad.

CAPITULO II

DE LAS DIRECCIONES GENERALES

Artículo 166.- Son Direcciones Generales:

- La Dirección General de Orden y Seguridad;
- La Dirección General de Institutos Policiales de Enseñanza;
- La Dirección General de Logística; y,
- La Dirección General de Bienestar Policial.

Las Direcciones Generales serán ejercidas por Comisarios Generales Directores de Orden y Seguridad.

Artículo 167.- La Dirección General de Orden y Seguridad es el organismo central encargado del cumplimiento de la finalidad fundamental de la Policía, conforme a la Constitución Nacional y las Leyes.

Integran la Dirección General de Orden y Seguridad:

- Las Direcciones de Zonas Policiales;
- La Dirección de Apoyos Técnicos; y,
- La Dirección de Apoyo Táctico.

Estas Direcciones serán ejercidas por un Oficial Superior con el grado de Comisario General Inspector de Orden y Seguridad. La Organización y funcionamiento de las mismas se regirán por reglamento.

Artículo 168.- Las Direcciones de Zonas Policiales son organismos que ejercen la jurisdicción y competencia en un espacio geográfico del

territorio nacional y se organizan en Jefaturas de Policía de Departamentos.

Artículo 169.- Las Jefaturas de Policía de Departamentos son las encargadas de planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades policiales referentes al Orden Público, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención e investigación de los delitos, turismo, protección ecológica, control en fronteras, las medidas tutelares aplicables al menor y demás faltas y contravenciones; asimismo, cooperan con organismos de otros Poderes del Estado e Instituciones que para el cumplimiento de sus fines requieran el apoyo de la fuerza pública que ejercen y representan.

Las Jefaturas de Policías de Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de Orden y Seguridad.

Se organizan en Comisarías, Sub Comisarías, Destacamentos y Puestos Policiales; éstos se rigen por reglamento.

Artículo 170.- La Dirección de Apoyo Técnico es el organismo encargado de planear, organizar y ejecutar el apoyo técnico científico a las funciones preventivas e investigativas de la Policía.

Los componen:

- El Departamento de Investigación de Delitos;
- El Departamento de Identificaciones;
- El Departamento de Interpol;
- El Departamento Judicial;
- El Departamento de Comunicaciones;
- El Departamento de Informática;
- El Departamento de Migraciones;
- El Departamento de Narcóticos; y
- El Departamento de Asuntos Familiares.

Las Jefaturas de los Departamentos que integran la Dirección de Apoyo Técnico, serán desempeñadas por Oficiales con el grado de Comisario Principal de Orden y Seguridad.

La organización y funcionamiento de estos Departamentos se regirán por sus reglamentos respectivos.

Artículo 171.- La Dirección de Apoyo Táctico es el organismo encargado de apoyar en las operaciones policiales a las distintas dependencias de la Policía Nacional, cuando la situación lo requiera.

Los conforman:

- La Agrupación Especializada;
- La Agrupación de Seguridad;
- La Agrupación Motorizada;
- La Agrupación Bomberos;
- La Agrupación Montada;
- La Agrupación de Protección Ecológica; y,
- La Agrupación Fluvial y Aero Policial.

Las Jefaturas de las Agrupaciones que integran la Dirección de Apoyo Táctico serán ejercidas por Oficiales Superiores con el grado de Comisario Principal de Orden y Seguridad.

La organización y funcionamiento de las mismas se regirán por reglamento.

Artículo 172.- La Dirección General de Institutos Policiales de Enseñanza es el organismo encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los planes y programas para la formación, especialización y perfeccionamiento profesional, técnico, científico y cultural del personal policial.

La Dirección del Colegio Superior de Policía será ejercida por un Comisario General Inspector de Orden y Seguridad; y la Dirección de los demás Institutos, por Oficiales Superiores de Orden y Seguridad.

Integran:

- El Colegio Superior de Policía.

Institutos de Perfeccionamiento:

- La Escuela de Jefes y Asesoramiento Policial;
- La Escuela de Aplicación para Oficiales;
- La Escuela de Especialización Profesional; y,

- La Escuela de Aplicación para Sub Oficiales.

Institutos de Formación:

- El Colegio de Policía;
- La Escuela de Educación Física;
- La Escuela de Sub Oficiales; y,
- La Banda de Músicos y Escuela de Aprendices.

La organización y funcionamiento de los Institutos Policiales de Enseñanza se regirán por sus reglamentos y planes de estudio respectivos.

Artículo 173.- La Dirección General de Logística es el organismo encargado de planear, dirigir, organizar y controlar los recursos materiales asignados a la Policía Nacional; realiza los procesos de adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Institución.

Los componen:

- La Dirección Administrativa.

Departamentos:

- Talleres y Obras;
- Construcciones;
- Armamentos y Municiones;
- Estadísticas;
- Patrimonio; y,
- Centro de Documentación e Información.

Artículo 174.- La Dirección Administrativa es el organismo dependiente de la Dirección General de Logística encargada del aspecto administrativo y financiero de la institución.

Los componen:

- El Departamento de Finanzas y Contabilidad;
- El Departamento de Intendencia; y,
- El Departamento Agropecuario.

Artículo 175.- La Dirección Administrativa será ejercida por un Comisario General Inspector de Intendencia y los Departamentos, por

Oficiales Superiores. La organización y funcionamiento de los mismos se regirán por reglamento.

Artículo 176.- La Dirección General de Bienestar Policial es el organismo que se encarga de la búsqueda permanente de protección al personal policial y su familia, en lo referente a salud, vivienda, recreación, ayuda social, educativa y otros, relativos al bienestar de los mismos.

Los Departamentos que integran la Dirección General de Bienestar Policial serán ejercidos por Oficiales Superiores.

Integran:

- El Departamento de Sanidad;
- El Departamento de Vivienda;
- Los Clubes Policiales;
- El Departamento Financiero y Económico;
- El Departamento de Asistencia Social;
- El Departamento de Asistencia Jurídica;
- El Departamento de Asistencia Educativa;
- La Capellanía;
- El Hogar de Reposo y de Menores; y,
- La Junta de Reconocimiento Médico Policial.

La organización y funcionamiento de los Departamentos se regirán por reglamento.

TITULO XII

DE LOS NOMBRAMIENTOS

CAPITULO UNICO

Artículo 177.- Serán nombrados por Decretos del Poder Ejecutivo:

- El Comandante de la Policía Nacional;
- El Sub Comandante de la Policía Nacional;
- El Director de la Dirección Administrativa;

- El Director de Justicia Policial y Miembros;
- Los Integrantes del Departamento de Asistencia Jurídica;
- Los Asesores Jurídicos;
- Los Profesores de los Institutos Policiales de Enseñanza; y ,
- Los Alumnos de los Institutos de Formación Policial.

Artículo 178.- Los demás cargos serán desempeñados por Oficiales nombrados por Comandante de la Policía Nacional.

TITULO XIII

DE LAS DISPOSICIONES ACLARATORIAS

CAPITULO UNICO

Artículo 179.- El personal del escalafón femenino tendrá normas especiales de sus funciones en el reglamento.

Artículo 180.- Los egresados de la Escuela de Aprendices Músicos son equiparados a los Sub Oficiales egresados de la Escuela de Sub Oficiales.

Artículo 181.- El nombramiento del Comandante de la Policía Nacional conlleva el grado de Comisario General Comandante.

Artículo 182.- Los Oficiales y Sub Oficiales en situación de retiro de la Policía de la Capital pasan a integrar el Cuadro de la Reserva de la Policía Nacional y gozan de los mismos derechos y obligaciones que esta Ley determina para los retirados y pensionados de la Policía Nacional.

Artículo 183.- Son actos de servicios los prestados por el personal policial en el ejercicio activo de sus funciones.

Artículo 184. Para la aplicación de esta Ley, se entenderán por accidentes, lesiones y enfermedades, contraídos en actos de servicio, aquellos que sufre el personal en el desempeño de sus funciones, y que fueran producidos como consecuencia del cumplimiento de los deberes policiales. Asimismo, las lesiones sufridas por accidente en el trayecto

de ida y regreso entre su domicilio y el lugar donde desempeña sus funciones.

Artículo 185.- A los efectos de esta Ley, son considerados sinónimos los términos Retirados y Jubilados.

Artículo 186.- Denominase dependencias a los efectos de esta Ley, a todos los organismos componentes de la Policía Nacional.

Artículo 187.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, será de aplicación a los actos administrativos y resoluciones de la Policía Nacional las disposiciones de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y contra aquellas se podrá interponer la acción contenciosa administrativa ante el Tribunal de Cuentas.

TITULO XIV

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO UNICO

Artículo 1º.- La Policía Nacional se organiza teniendo como base la Policía de la Capital.

Se integrarán a la misma los siguientes organismos actualmente dependientes del Poder Ejecutivo:

- El Personal de las Delegaciones de Gobierno; y,
- La Dirección de Migraciones.

La integración conlleva las asignaciones presupuestarias, el personal, los bienes muebles e inmuebles, los semovientes, armamentos, transportes, equipos, elementos, y demás bienes que pasan a conformar el patrimonio de la Policía Nacional, salvo las sedes actuales de las Delegaciones de Gobierno con sus instalaciones y mobiliarios que pasan de pleno derecho a título gratuito a ser propiedad de los Gobiernos Departamentales.

Artículo 2º.- El Grado de Comisario General Director será conferido a los Comisarios Generales de Orden y Seguridad que ejerzan los cargos de:

- Sub Comandante de la Policía Nacional;
- Director General de Orden y Seguridad;
- Director General de Institutos Policiales de Enseñanza;
- Director General de Logística; y,
- Director General de Bienestar Policial.

Artículo 3º.- El grado de Comisario General Inspector será conferido a los demás Comisarios Generales en actividad y en ejercicio del cargo.

Artículo 4º.- El Cuadro de Oficiales con los grados respectivos para la Policía Nacional será cubierto por Oficiales de la Policía de la Capital, confiriéndoseles el grado conforme a los años de servicios y antigüedad como Oficial y demás requisitos establecidos en esta Ley y el reglamento de incorporación, según la siguiente escala:

ANEXO 1

AÑOS DE SERVICIO EN LA GRADOS EN LA

POLICIA DE LA CAPITAL POLICIA NACIONAL

1 a 2 Oficial Ayudante
3 a 5 Oficial Segundo
6 a 9 Oficial Primero
10 a 14 Oficial Inspector
15 a 19 Sub Comisario
20 a 23 Comisario
24 a 26 Comisario principal
Comisario General Inspector
Comisario General Director
Comisario General Comandante

Artículo 5º.- El Cuadro de Sub Oficiales con los grados respectivos para la Policía Nacional será cubierto por Sub Oficiales de Policía de la Capital, confiriéndoseles el grado conforme a los años de servicio y antigüedad como tal y demás requisitos establecidos en esta Ley y el reglamento de incorporación, según la siguiente escala:

ANEXO 2

AÑOS DE SERVICIO EN LA GRADOS EN LA POLICIA DE LA CAPITAL, POLICIA NACIONAL PERS. DELEG. DE GOBIERNO

1 a 4 Sub Oficial Ayudante
5 a 8 Sub Oficial Segundo
9 a 12 Sub Oficial Primero
13 a 17 Sub Oficial Inspector
18 a 22 Sub Oficial Mayor
23 a 27 Sub Oficial Principal
Sub Oficial Superior

Artículo 6º.- El personal de las Delegaciones de Gobierno que ejerce cargo con función policial, pasará al cuadro de Sub Oficiales de la Policía Nacional, confiriéndosele el grado correspondiente conforme a los años de servicio y demás requisitos establecidos en esta Ley, el reglamento de incorporación y la escala establecido en el artículo anterior. A este personal se le brindarán cursos académicos que posibiliten su incorporación al cuadro de oficiales.

Artículo 7º.- El personal civil de las Instituciones incorporadas a la Policía Nacional se registrará por el Capítulo I del Título IV de la presente Ley.

Artículo 8º.- A los efectos de la incorporación a la Policía Nacional, del personal de las instituciones afectadas será convocado el Tribunal de Calificaciones de Servicio. El personal policial con 30 (treinta) años de

antigüedad, pasará a retiro, conforme a lo establecido en esta Ley, a excepción del Comandante y Sub-Comandante de la Policía Nacional nombrados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 9º.- Los Oficiales en actividad, no egresados del Colegio de Policía que se incorporen a la Policía Nacional, serán regidos por su reglamento; hasta tanto se complete el contingente necesario con Oficiales egresados de dicho Instituto o de la Universidad.

Artículo 10º.- Los Sub Oficiales en actividad no egresados de la Escuela de Sub Oficiales de la Policía, y los incorporados en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6º de las Disposiciones Transitorias y finales de esta Ley a la Policía Nacional, serán regidos por su reglamento, hasta tanto se complete el contingente necesario con Sub Oficiales egresados de la mencionada institución.

Artículo 11º.- A los efectos de esta Ley, los Oficiales retirados de la Policía de la Capital que invistan los grados de Comisario General, Comisario Mayor y Comisario Inspector, pasarán a ser Comisario General Inspector, Comisario Principal y Comisario, respectivamente. Los demás grados mantendrán su denominación.

Los Comisarios Generales retirados de la Policía de la Capital percibirán los haberes que correspondan al Comisario General Director, y los demás lo correspondiente a su grado.

Artículo 12º.- La incorporación en el cuadro de Oficiales, Sub Oficiales y personal civil de la Policía Nacional se hará conforme a los requisitos establecidos en esta Ley y el reglamento respectivo.

Artículo 13º.- Los Oficiales o Sub Oficiales de la Policía de la Capital, al integrarse al cuadro de la Policía Nacional, podrán optar por el cambio de sus respectivas Especialidades o Ramas, previo dictamen del Tribunal de Calificaciones de Servicio.

Artículo 14º.- El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de reprogramación del Presupuesto General de la Nación, dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) días a partir de la vigencia de esta Ley,

atendiendo a la creación de la Policía Nacional y a los organismos que a ella se integran y a propuesta de su Comandante.

Artículo 15º.- Derogase todas las disposiciones contrarias a esta Ley.

Artículo 16º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veinte y cinco de junio del año un mil novecientos noventa y tres y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el veinte y nueve de junio del año un mil novecientos noventa y tres.